



COLOMBIA
RISK
ANALYSIS



**ELECCIONES
LOCALES
2019
COLOMBIA**

INFORME ESPECIAL

SEPTIEMBRE| 2019



TABLA DE CONTENIDOS

INTRODUCCION	3
REGION CARIBE	5
ATLÁNTICO (BARRANQUILLA)	5
BOLÍVAR (CARTAGENA)	7
CESAR (VALLEDUPAR)	10
LA GUAJIRA	12
REGION ANDINA	13
BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL	13
ANTIOQUIA (MEDELLÍN)	15
SANTANDER (BUCARAMANGA)	18
BOYACÁ	19
REGION PACIFICO	20
VALLE DEL CAUCA (CALI)	21
CHOCÓ	23
LA ORINOQUIA Y LA AMAZONÍA	24
META (VILLAVICENCIO)	24
PUTUMAYO	26
CONCLUSION	27

Edición General: Sergio Guzmán
 Investigación y redacción: Lorenzo Holt
 Traducción y montaje: Victoria Dangond

Colombia Risk Analysis es una consultora de riesgos políticos. Brindamos a nuestros clientes información, análisis, contexto y proyecciones sobre el entorno político, económico y social en Colombia y la región. A través de boletines mensuales, consultas detalladas y artículos de interés, Colombia Risk Analysis agrega valor a sus clientes en los sectores público y privado.

INTRODUCCION

Las elecciones locales del 27 de octubre en Colombia determinarán quién controlará los 32 departamentos, 1103 municipios, cerca de 500 asambleas departamentales y 11000 curules en concejos municipales a partir del próximo año. Este informe, elaborado por la consultora de riesgo político Colombia Risk Analysis, presenta las proyecciones de las elecciones y, de manera puntual, cómo se verá afectado el sector empresarial por los resultados.

Desde una perspectiva amplia, estas elecciones darán cuenta de los posibles cambios democráticos en Colombia, pasando de un sistema familiar a un sistema impulsado por plataformas políticas y de partidos. Las elecciones también servirán de barómetro de la opinión pública al cumplirse el primer año de gobierno del presidente Iván Duque. Finalmente, las elecciones pondrán a prueba la capacidad de los candidatos y partidos alternativos para quitarle poder a los partidos tradicionales, una tendencia que ha surgido en los centros urbanos más sofisticados de Colombia, pero que sigue siendo esquivada en las regiones periféricas.

Los avales políticos y las posiciones de los candidatos nos permiten sacar conclusiones preliminares sobre el resultado de las elecciones y su impacto en los negocios. En primer lugar, las ideologías y los partidos políticos han perdido relevancia. Muchos candidatos son producto de alianzas entre partidos de ideologías incompatibles, mientras que otros, se han desmarcado del todo de los partidos y se lanzaron como candidatos independientes. Para las empresas, esto significa que el análisis político de la afiliación a un partido será de utilidad marginal para evaluar la receptividad local a las propuestas de inversión y negocios. En cambio, comprender las conexiones entre familias poderosas y sus intereses comerciales sería un enfoque más útil.

La afiliación familiar continúa siendo un determinante clave en las candidaturas y el respaldo de los partidos a lo largo del espectro político. En consecuencia, las empresas deben comprender cómo los lazos familiares a menudo trascienden la política e interfieren con el entorno empresarial. Esto es evidente a través de la promoción de monopolios u oligopolios; un candidato de un gran clan familiar suele ser parte de una estrategia empresarial más amplia.

Los debates frente a las industrias extractivas, específicamente minería de oro y cobre e hidrocarburos, son un factor relevante que pesará en la contienda electoral municipal y departamental en Caquetá, Cesar, Antioquia, Santander y Arauca. Las insinuaciones de involucramiento de las empresas en la puja electoral deberán ser tenidas en cuenta al analizar las elecciones. Existe una gran preocupación por la seguridad durante las elecciones, en particular por la seguridad de los líderes sociales. Estas personas suelen ser figuras de autoridad y representan los intereses de los ciudadanos locales, a menudo en detrimento de los intereses de las élites políticas y económicas locales. El reciente anuncio de la creación de una “Nueva Guerrilla”, por parte de Iván Márquez, muy probablemente incrementa los riesgos de seguridad para los líderes sociales, excombatientes y movimientos alternativos que participen en el ciclo electoral, por tanto, es muy probable que el fenómeno de asesinatos de líderes sociales incremente.

Finalmente, los contratos públicos siguen siendo una fuente importante de mecenazgo político a nivel local y están plagados de riesgos de integridad. En muchas áreas, las acusaciones e incluso las condenas anteriores por corrupción tienen poco impacto en la elegibilidad de un candidato. Las empresas deben evaluar con precisión su papel en un entorno en el que los intereses creados y los sistemas de clientelismo se perciben como intenciones de socavar la integridad de las instituciones públicas locales, el sistema de atención médica, los reguladores ambientales y la supervisión fiscal. El riesgo es mayor para las empresas que interactúan con burócratas de nivel medio y bajo.

Sin lugar a dudas, publicar un documento antes de las elecciones implica un riesgo en sí mismo pues una serie de eventos podrían dar un giro a los resultados de los pronosticados. Tales eventos incluyen el resultado de la

citación de la Corte Suprema al ex presidente Álvaro Uribe, el 8 de octubre; la adjudicación del contrato para el metro de Bogotá, el 21 de octubre y la aprobación de los controvertidos planes de ordenamiento territorial para las jurisdicciones locales, entre otros.

La cantidad de campañas y candidatos en la contienda por las elecciones de octubre dificulta a las empresas, en particular a los inversores extranjeros, realizar un seguimiento de los candidatos y partidos que compiten y que podrían afectar sus intereses empresariales.

La desinformación que proviene de fuentes nacionales e internacionales constituye un reto adicional para la elaboración del análisis. Sin embargo, los riesgos políticos subnacionales deben ser considerados al evaluar la viabilidad de proyectos en un país tan diverso como Colombia, especialmente cuando un sector empresarial particular, como la minería, el transporte o los servicios públicos, se convierte en un tema de conversación y en el epicentro de controversia durante una campaña. El objetivo de este informe es presentar a los lectores algunas de las elecciones locales más representativas, los principales candidatos y temas en juego, y cómo su resultado puede afectar varios intereses empresariales en esas regiones.

Elecciones locales estudiadas por Colombia Risk Analysis



REGION CARIBE

La costa atlántica de Colombia es uno de sus destinos más atractivos para la inversión extranjera gracias a una industria turística en auge, infraestructura sólida, grandes puertos, sectores industriales y manufactureros importantes, e industrias extractivas bien establecidas.

Los negocios y la industria regionales siguen concentrados en las grandes y prósperas ciudades costeras, particularmente en Barranquilla y Cartagena, ciudades que cuentan con algunos de los puertos más grandes de América Latina y un importante desarrollo industrial. Santa Marta es otra ciudad costera importante a nivel económico. Aunque es más pequeña, se beneficia de su proximidad a las atracciones turísticas naturales como el Parque Nacional Tayrona y la Sierra Nevada. El desarrollo se reduce drásticamente en departamentos como La Guajira y Cesar, cuyas economías locales están centradas principalmente en la agricultura, la extracción de recursos naturales y el eco turismo.

A pesar de su potencial económico, históricamente, la costa caribe no ha estado dentro de las prioridades del gobierno nacional; la región siempre ha estado subrepresentada en el Congreso en relación a su extensión. Por otra parte, prevalece la percepción de corrupción en gracias a un sistema político dominado por familias caribeñas afluentes y frecuentemente sacudido por casos de corrupción de alto perfil. La opinión pública sostiene que la costa caribe ha prosperado a pesar de sus políticos, pero, en algunas ciudades como Barranquilla, los gobernantes más recientes han intentado desafiar este estereotipo.

Las próximas elecciones indican pocos cambios respecto del liderazgo tradicional de los partidos que representan los intereses empresariales establecidos. En algunas ciudades, esto significa una continua disfunción gubernamental y riesgos de integridad para las empresas, mientras que en otras, la continuidad política puede producir mejoras tangibles en la infraestructura, el bienestar social y el entorno empresarial en general.

Atlántico (Barranquilla)

Barranquilla es la ciudad más grande y rica de la costa atlántica y la capital del departamento del Atlántico. Lo que le falta en atracciones turísticas lo compensa a través de un sector comercial de importancia nacional, una industria robusta y una ubicación privilegiada en la desembocadura del río Magdalena. Con una población de aproximadamente 1,8 millones, Barranquilla es una ciudad en expansión que atrae a inmigrantes de toda la región y, más recientemente, de Venezuela. Aunque es una potencia regional, el desarrollo a largo plazo de Barranquilla sigue obstaculizado por problemas sociales como bajos niveles de educación y altos índices de informalidad laboral.

Los pilares de la economía de Barranquilla son sus puertos, los cuales mueven cerca de 10 millones de toneladas de carga al año; Puerto Barranquilla, el puerto principal, mueve 4,5 millones de toneladas. Las principales importaciones incluyen el 40% del acero de Colombia, alrededor de 1,2 millones de toneladas por año, y productos agrícolas como la soja, el grano y el maíz. Las exportaciones son principalmente recursos naturales como carbón coquizable y petróleo, que se transportan desde Cundinamarca, Boyacá y Santander, así como productos químicos y productos agrícolas producidos localmente. La infraestructura alrededor de los puertos es suficiente pero limitada por el tráfico en las carreteras relativamente pequeñas dentro de la ciudad, las preocupaciones ambientales alrededor del río y un puente bajo que impide que los buques de carga más grandes viajen por el río Magdalena.

El puente de mayor altura, el Puente Pumarejo, está en construcción desde 2015 y se espera que la obra concluya a finales de 2019. Sin embargo, dado el tamaño de la obra del nuevo puente y la necesidad de demoler el puente existente, se estiman que pasarán al menos dos años más antes de que se terminen los trabajos

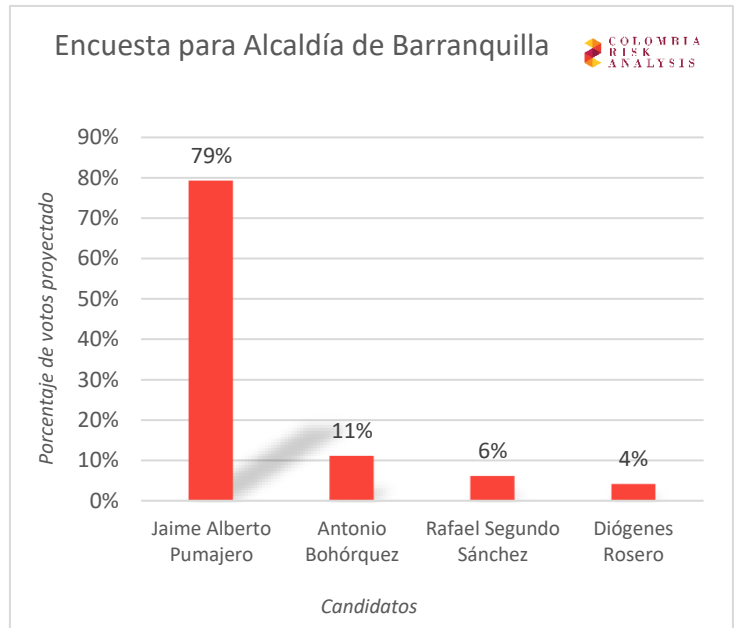
alrededor del río. Mientras tanto, el paso estará limitado a barcos de menos de 15 metros altura o menos de 7,000 toneladas. La culminación de la obra será un hito hacia el desarrollo de los puertos de Barranquilla y el río Magdalena en su conjunto, que se extiende 600 km al suroeste hacia el centro de Colombia, y podría actuar como una importante ruta de acceso para el comercio y el transporte en todo el país. Otros planes de mejora importantes pero de menor envergadura son las soluciones de dragado permanentes y más profundas alrededor de los puertos y carreteras más amplias entre Barranquilla y Ciénaga.

Otros sectores importantes de la economía de Barranquilla son la manufactura, los servicios de salud y, en menor grado, el turismo. Gracias a su tamaño y ubicación, las compañías químicas, de productos agrícolas procesados, farmacéuticas y de acero procesado, se han agrupado alrededor de la ciudad. La salud también es un sector de desarrollo para la ciudad; los servicios médicos de alta calidad y los precios competitivos atraen a clientes extranjeros. Finalmente, la ciudad se beneficia de un poco de turismo gracias al Carnaval de Barranquilla y su ubicación estratégica entre los centros turísticos de Santa Marta y Cartagena.

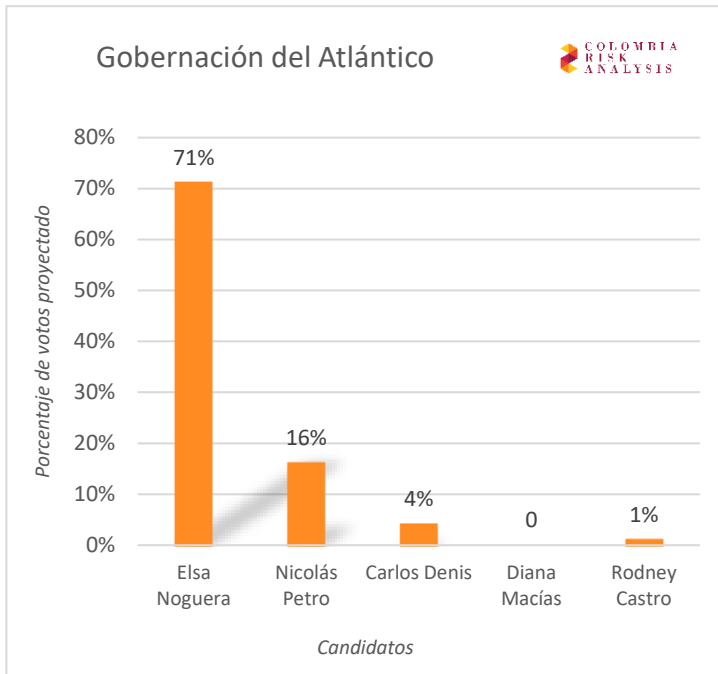
A nivel político, Barranquilla ha estado dominada en los últimos diez años por la familia Char, élite local que poseen la omnipresente cadena de supermercados Olímpica y el equipo de fútbol de primera división de la ciudad. Desde 2008, las elecciones a la alcaldía se alternaron entre Alejandro Char, el actual alcalde, y su aliada de vieja data, Elsa Noguera, ambos haciendo campaña bajo la bandera de Cambio Radical. En las elecciones de 2019 la familia Char ha dado su aval a Jaime Pumarejo, ex miembro del gabinete de la ciudad de las administraciones Char y Noguera, y quien también se postula bajo Cambio Radical, mientras que Noguera es quien lidera las encuestas para la gobernación de Atlántico. Dichas encuestas muestran que los dos candidatos apoyados por los Char cuentan con la mayor intención de voto, Noguera con un 72% y Pumarejo, con el 80%.

Los candidatos alternativos a la alcaldía son Antonio Bohorquez con el Polo Democrático (Polo), Rafael Sánchez con la Alianza Social Independiente (ASI) y Diógenes Rosero con la Alianza Verde (AV). Los tres son partidos minoritarios y sólo capaces de capturar pequeños porcentajes del voto. Mientras tanto, los candidatos de la oposición para la gobernación de Atlántico son Rodney Darío Castro, con Colombia Renaciente (CRN); Carlos Julio Dennis, con Colombia Justa Libres (CJR); Nicolás Petro, hijo del ex alcalde de Bogotá Gustavo Petro, con Colombia Humana (CH); y Diana Macías, con ASI. Sin embargo, todas las candidaturas serán en gran parte simbólica en una carrera que se espera que esté dominada por la familia Char y sus aliados.

Los partidarios de la familia Char señalan el reciente crecimiento económico de la ciudad como prueba de su buen gobierno e interés en el bienestar de la ciudad, pero los críticos argumentan que el oligopolio solo ha beneficiado a las élites y sus socios comerciales extranjeros al tiempo que mantiene marginadas muchas áreas. Entre los problemas que aquejan a las zonas más pobres y periféricas de Barranquilla está una infraestructura de transporte deficiente, falta de acceso a la educación, a la atención médica y a servicios básicos como la electricidad y el agua. Cabe notar que en la zona rural de Atlántico también persisten estos problemas y que la reciente afluencia de migrantes venezolanos los ha exacerbado.



Fuente: [Invamer](#) 6 de septiembre de 2019



Fuente: [Invamer](#) 26 de agosto de 2019

realidad política. La elección de los Pumarejo y Noguera es un testimonio de la creciente influencia de la familia Char, y se especula sobre las aspiraciones de Alejandro Char para la presidencia colombiana. Desde el contexto de la región costera en su conjunto, Barranquilla y el departamento del Atlántico deberían verse como ejemplos de un liderazgo político notablemente estable y efectivo que aliente la inversión extranjera.

Bolívar (Cartagena)

Aproximadamente a 100 km al suroeste de Barranquilla se encuentra Cartagena, la capital del departamento de Bolívar y la quinta ciudad más grande de Colombia. Aunque obviamente tiene similitudes geográficas y económicas con su vecina, su entorno político contrasta fuertemente, caracterizándose por partidos en competencia, mandatos incompletos y nombramientos políticos por parte del gobierno nacional.

El turismo y la industria química son los pilares de la ciudad, mientras que la agricultura predomina en las áreas rurales del departamento de Bolívar. Los últimos alcaldes de Cartagena han sido designados por el gobierno nacional en Bogotá tras múltiples incidentes de corrupción. Esta inestabilidad política ha provocado que la ciudad crezca de manera ad-hoc, dirigida por actores privados, con poca supervisión gubernamental o interés en un desarrollo público integral. Esto ha resultado en desigualdades sociales muy visibles dentro de la propia Cartagena y desde la ciudad hacia el departamento.

De manera similar a Atlántico, la economía de Bolívar depende en gran medida del acceso a los mercados extranjeros provisto por el puerto de su capital, el más grande del país después del puerto Buenaventura en la costa pacífica. Las importaciones de contenedores completos han aumentado desde 2014, aumentando un 10% año tras año a 310.737 contenedores en 2018, mientras que las exportaciones aumentaron un 8% a 209.010 contenedores. Cartagena alberga al grupo de producción de petroquímicos y plásticos más extenso de Colombia, con refinerías emblemáticas como Reficar, una de las refinerías de petróleo más grandes de América Latina. Múltiples compañías internacionales, como Mexichem y Dow Chemical, tienen operaciones en Cartagena, y una importante industria de procesamiento de acero también se ha desarrollado en la ciudad. El puerto atrae productos agrícolas e industriales de todo el departamento y la red vial que conduce a la ciudad

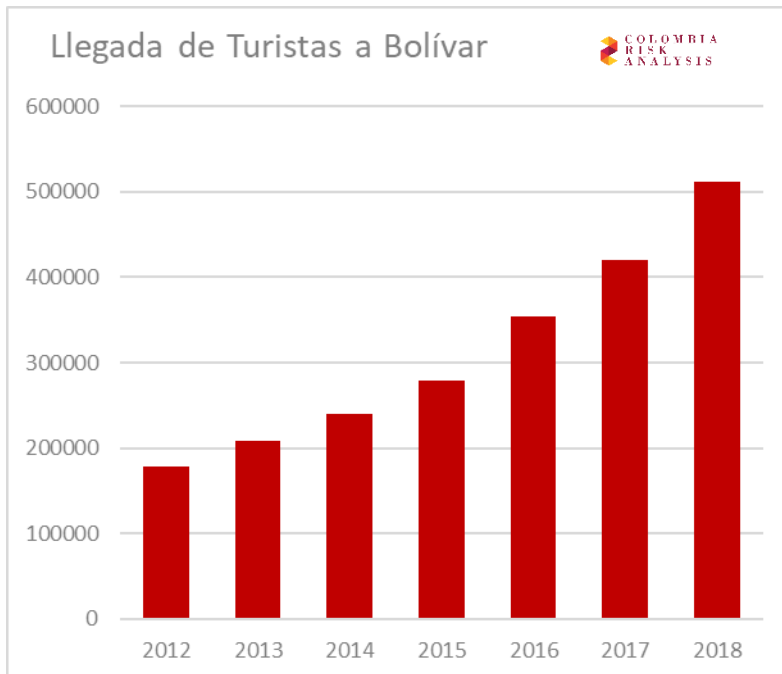
Sin embargo, la familia Char se ha ganado la reputación de haber modernizado Barranquilla y creado un entorno favorable para las empresas locales y extranjeras, combinando, de manera efectiva, sus intereses privados con una visión política popular. Más de una década de continuidad política es evidencia de su éxito, especialmente cuando se compara con la volatilidad de ciudades vecinas como Cartagena.

Pronóstico

Los candidatos apadrinados por la familia Char tienen seguro la delantera en las elecciones municipales y departamentales, lo que refleja el poder de la maquinaria política tradicional a lo largo de la costa. Las críticas continuarán, pero mientras la economía prospere, el equipo de fútbol siga ganando y la familia de élite conserve un amplio apoyo popular, es poco probable que su oposición se traduzca en

está relativamente bien desarrollada y mantenida. Además, el Canal del Dique conecta la gran bahía de Cartagena con el río Magdalena, proporcionando acceso a puertos fluviales tierra adentro.

Cartagena también es uno de los destinos turísticos más populares de Colombia, en ella confluyen turistas nacionales e internacionales atraídos por la ciudad amurallada y las playas e islas cercanas. Las llegadas de cruceros a Cartagena han incrementado, pasando de 120 cruceros en 2009 a 217 cruceros en 2018. Los visitantes que llegan al departamento de Bolívar por vía aérea también han aumentado año tras año llegando a 511,906 en 2018, la mayor cantidad de cualquier departamento después de Bogotá DC.

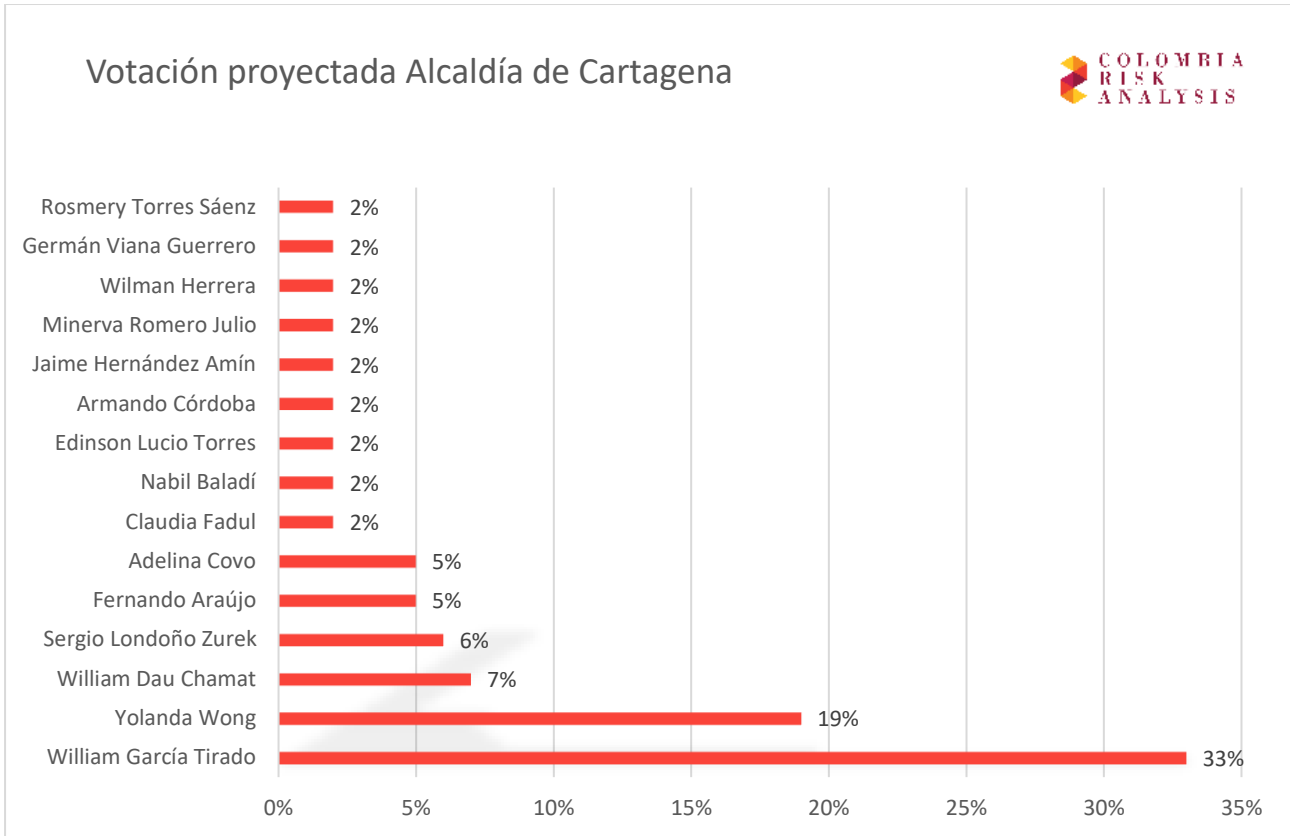


Fuente: Migracion Colombia - MinCIT - Citur

A nivel político, la ciudad ha tenido menos éxito. En los últimos siete años han sido nombrados nueve alcaldes, uno de los cuales está en la cárcel y otros tres han sido suspendidos por corrupción. Durante este tiempo, la ciudad ha tenido más alcaldes nombrados por Bogotá que aquellos elegidos popularmente. Se espera que Pedro Pereira, el alcalde designado en septiembre de 2018, gobierne hasta que quien sea elegido en octubre se haga cargo en enero de 2020. Pereira, miembro del Partido Conservador, recibió un apoyo inusual, y ha desarrollado una administración aparentemente transparente tras media década de escándalos de corrupción. Pero las circunstancias especiales que rodearon su nombramiento el año pasado requirieron que el gobierno nacional lo certificara nuevamente en agosto, y en una jugada sorpresa, su

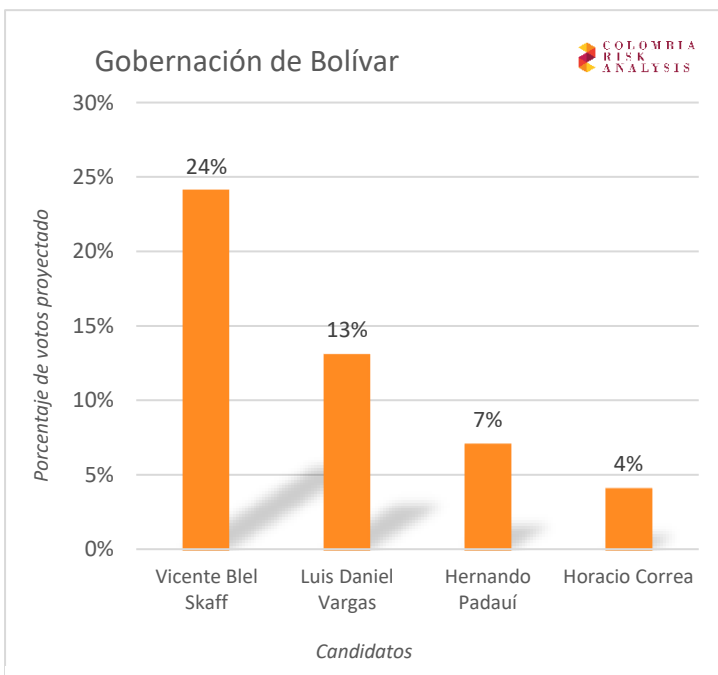
partido no lo colocó entre los nominados. Esto significa que otro alcalde designado gobernará hasta que un alcalde electo pueda hacerse cargo en enero de 2020.

Las próximas elecciones no muestran signos de estabilización política en la ciudad. Hay quince candidatos en la contienda por la alcaldía y todos están centrados en el mismo problema: la corrupción. Según la última encuesta realizada por CNC, el candidato que lleva la delantera, con un estimado del 33% de los votos, es William García, un economista con el apoyo de Colombia Justa Libres y la Alianza Social Independiente, y estrechamente asociado con el ex alcalde Manolo Duque, ahora encarcelado por cargos de corrupción. A García lo sigue Yolanda Wong con un 19% de la intención de voto. Wong es abogada con experiencia en cargos departamentales del gobierno, y que quedó en segundo lugar en las últimas elecciones.



Fuente: [CNC](#) 24 de agosto de 2019

En el departamento de Bolívar en su conjunto, la política es mucho más estable, a pesar de sufrir la misma dicotomía de riqueza entre la costa y el interior que la que sufre Cartagena entre el centro y sus periferias. Pese a una serie de términos incompletos a fines de la década de 2000, el gobernador Dumek Turbay Paz parece listo para completar su mandato con aprobación popular y sin problemas legales. Su predecesor, que también se postuló bajo el Partido Liberal también llevó a buen término su mandato.



Fuente: [Mediciones Estratégicas](#) 6 de agosto de 2019

De los cuatro candidatos para la gobernación, el candidato con más probabilidades es Vicente Blel Skaff, hijo de un ex congresista del mismo nombre. Su tía, Nadia Blel, actualmente cumple un mandato en el Senado para el Partido Conservador. Blel Skaff cuenta con el apoyo de partidos importantes como PC, el Partido de la U, el Partido Liberal, Alianza Social Independiente y el Centro Democrático. Sus tres contendientes son Hernando Padauí con Cambio Radical, Luis Daniel Vargas con Colombia Renaciente y Horacio Correa con la Alianza Verde y el Polo.

Pronóstico

Los candidatos a la alcaldía para Cartagena han centrado sus campañas en erradicar la corrupción, una tarea muy difícil dada la

historia de la ciudad. Aunque es probable que García gane, cualquier candidato que resulte electo se enfrentará a una batalla cuesta arriba contra la corrupción oficial arraigada, especialmente cuando tantos candidatos están vinculados a personas condenadas. Pero gracias a la ubicación geográfica de Cartagena, el atractivo turístico, la inversión extranjera y la mejora de la situación económica a nivel nacional, la ciudad seguirá siendo una opción atractiva para la inversión extranjera sin importar el liderazgo local. En cuanto a Bolívar, la victoria casi segura de Blél Skaff, quien goza del apoyo unificado de la élite de la ciudad, sugiere que los negocios continuarán como de costumbre durante los próximos cuatro años en todo el departamento.

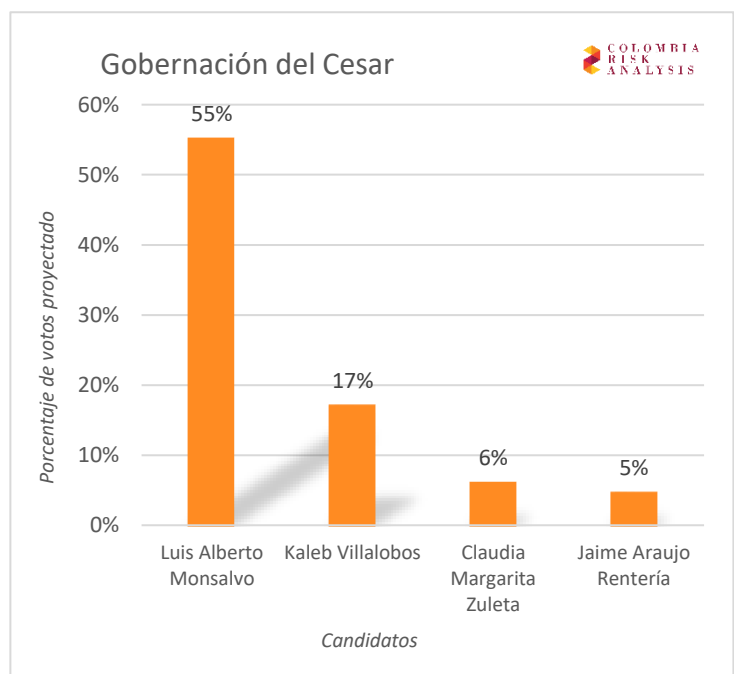
Cesar (Valledupar)

A pesar de estar a 100 km de la costa más cercana, Valledupar, capital del departamento de Cesar, se incluye en el análisis de la región costera debido a la dependencia de su industria turística, agrícola y extractiva en relación a su proximidad al Caribe. Ubicada al norte del departamento de Cesar y cerca de la frontera de La Guajira, la economía de Valledupar gira en torno a los turistas locales e internacionales atraídos por su belleza natural y el festival de música Vallenato, el principal patrimonio cultural de la ciudad. La ciudad también se beneficia de los servicios y la logística relacionados con la gran mina de carbón del departamento, La Loma, así como con otras minas más pequeñas y negocios de procesamiento agrícola de algodón, ganado y productos lácteos.

Valledupar se encuentra en el extremo norte de una región rica en recursos naturales, conectada a la costa a través de dos carreteras pequeñas pero bien mantenidas, con sistemas de autobuses regulares y eficientes, y un sistema ferroviario industrial. La seguridad sigue siendo un problema en la ciudad. Es frecuente el envío de soldados para patrullar las calles en un esfuerzo por combatir la creciente inseguridad nocturna en la ciudad y a lo largo de las rutas comerciales. Muchos ciudadanos atribuyen la inseguridad a la afluencia de migrantes venezolanos.

De manera similar a La Guajira, existe una animosidad generalizada en el Cesar hacia la industria extractiva; los ciudadanos perciben a esta industria como la responsable de perpetuar la pobreza y evitar el desarrollo social equitativo y la diversificación económica. Las empresas se han enfrentado a estas percepciones, a disturbios sociales y a violencia antigubernamental, a pesar de los grandes ingresos que generan para los gobiernos locales. Además, el departamento también está luchando con una gran afluencia de migrantes venezolanos, lo que ha agotado los recursos del gobierno y ha presionado a un mercado laboral ya limitado.

Al sur de Valledupar, la economía del César gira en torno a la agricultura y la minería del carbón, como es el caso en La Jagua de Ibirico. Además, los depósitos de gas no convencionales cerca de Aguachica y San Martín harán del departamento una zona para la implementación de los programas piloto de fracking, lo que ha provocado un acalorado debate a nivel nacional y local. De ser aprobado, es probable que el fracking se lleve a cabo en áreas que ya se utilizan para la extracción de carbón y, por lo tanto, disfrutan de un cierto grado de infraestructura y economías de escala. Muchas de las compañías mineras han solicitado las licencias de fracking. pese a los avances de la industria extractiva, esta seguirá enfrentando riesgos de seguridad moderados por parte de las guerrillas antigubernamentales, que permanecen fuertes



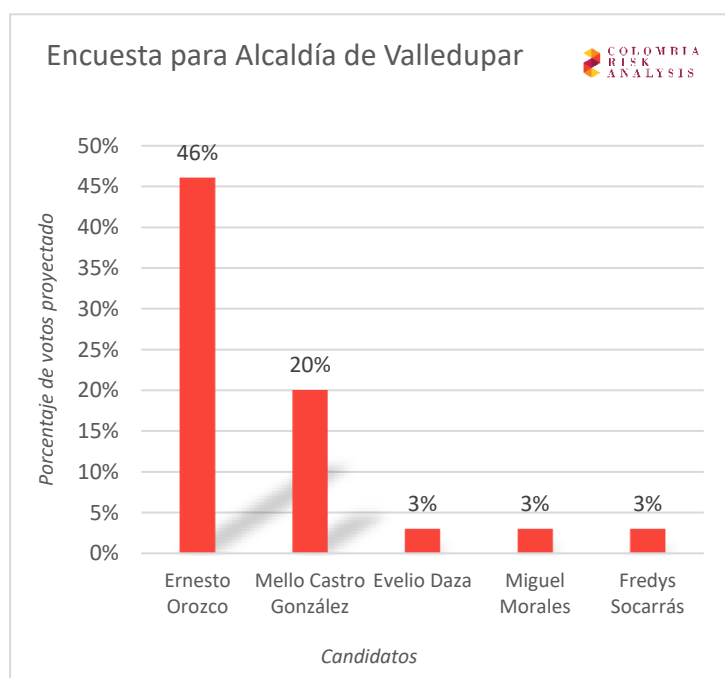
Fuente: [Cefin](#) 14 de agosto de 2019

en la región del Catatumbo, a aproximadamente 135 km de Aguachica. Los proyectos de fracking no serán inmunes a estos riesgos y a los ataques a la infraestructura del sector extractivo que interrumpen las operaciones.

La política en Cesar está directamente relacionada con los partidos políticos liderados por familias tradicionales. El gobernador, Franco Ovalle, es un político de vieja data asociado al clan Gnecco, una poderosa familia local que enfrenta acusaciones de paramilitarismo. El alcalde de Valledupar, Augusto Daniel Ramírez, también tiene una estrecha relación con el clan Gnecco y enfrenta varias investigaciones de corrupción por su administración de contratos públicos y críticas en los medios de comunicación por promesas de campaña incumplidas.

Hay cuatro candidatos postulados para la gobernación de Cesar, pero existe un claro liderazgo por parte de Luis Alberto Monsalvo, miembro de la familia Gnecco y quien goza del apoyo de una coalición entre Cambio Radical, el Partido de la U y el Partido Liberal. Según la última encuesta de IPSOS, Monsalvo cuenta con el 55% de la intención de voto. Le siguen, pero con pocas posibilidades de ganar, Kaleb Villalobos Brochel, independiente, Jaime Araujo Rentería, con Colombia Humana, Hugo Alejandro Vásquez con el Polo y Claudia Margarita Zuleta, con el Centro Democrático.

La carrera por la alcaldía de Valledupar es similar, con un candidato afiliado al clan Gnecco liderando las encuestas con apoyo popular y partidista. Se trata de Ernesto Miguel Orozco, un experimentado burócrata quien ha sido acusado de corrupción y de desviar fondos de compensación de guerra de familias a paramilitares. Aunque Orozco se lanzó como independiente, cuenta con el apoyo del Partido Conservador, el Partido Liberal y el clan Gnecco. De manera similar a Monsalvo, Orozco cuenta con el 45% de la intención de voto, según la última encuesta de IPSOS del 22 de agosto. A Orozco le sigue José Santos "Mello" Castro, un político mucho más joven respaldado por el Partido de la U, quien contaría sólo con el 18% en las votaciones. Ambos candidatos han basado su retórica de campaña en mejorar la seguridad, las oportunidades laborales y los servicios públicos. Los otros cinco candidatos se postulan de manera independiente o con el apoyo de partidos menores, y centran sus campañas en la lucha contra la corrupción.



Fuente: [CNC](#) 14 de agosto de 2019

Pronóstico

Los resultados previstos son las victorias para Orozco y Monsalvo, que representan a las élites políticas y empresariales locales que favorecen el status quo y la inversión extranjera, pero que probablemente harán poco para mejorar los riesgos de integridad estructural. Es improbable que los ganadores aborden temas de distribución de la riqueza y la pobreza rural del departamento, pero es probable que las políticas favorables a las empresas, particularmente dirigidas al turismo, las industrias extractivas y la infraestructura, sean las protagonistas. Los partidos alternativos continuarán protestando contra la corrupción y el abandono estatal, tal vez obteniendo victorias en municipios más pequeños, pero tienen pocas posibilidades de afectar la política en la capital o en el departamento en general.

La Guajira

El departamento fronterizo al norte del país es uno de los más pobres de la región. A pesar de su ubicación y larga línea costera, la Guajira, en comparación a los departamentos vecinos, carece de un desarrollo urbano, servicios comerciales, producción industrial y turismo significativo. Los mayores ingresos para el departamento provienen de la extracción masiva de recursos naturales, actividad que eclipsa otros sectores. Su liderazgo político ha reflejado esta alta dependencia de los recursos naturales, caracterizada por una relación antagónica entre las comunidades locales y los políticos; las comunidades acusan a los políticos de descuidar el desarrollo social y no invertir la riqueza generada por la extracción de recursos. Las compañías locales e internacionales también se convierten con frecuencia en blanco de disturbios civiles debido a su capacidad percibida para influir en los tomadores de decisiones locales y nacionales.

La joya de la corona de la industria extractiva en La Guajira es El Cerrejón, una de las minas de carbón a cielo abierto más grandes del mundo, ubicada en la región montañosa oriental del departamento, cerca a la frontera con Venezuela. La mina es propiedad de subsidiarias de las compañías mineras internacionales BHP, Anglo American y Glencore, y produce más de 32 millones de toneladas por año. El departamento también es una de las áreas productoras de hidrocarburos más antiguas e importantes de Colombia y, a pesar de su disminución de la producción, continúa atrayendo nuevos proyectos. En junio, Ecopetrol ganó una licitación gubernamental para explorar y producir en más de 100,000 hectáreas costa afuera. Pese al potencial de recursos naturales en el departamento, la mayoría de las ciudades dependen en gran medida de la agricultura o de la industria ligera, como la producción de madera. Por otra parte, debido a la pobreza general de la región, se ha desarrollado un importante mercado negro en la minería ilegal, el robo de petróleo y el contrabando transfronterizo de combustible.

Según La Silla Vacía, La Guajira es el departamento menos gobernable de la costa, con un número de líderes designados por el gobierno nacional comparable al de Bolívar. Las protestas sociales por necesidades básicas como carreteras, educación, y agua potable son comunes en La Guajira. En junio, los manifestantes bloquearon las principales carreteras departamentales, un reflejo de la tensión agregada por los migrantes venezolanos, para quienes la Guajira es a menudo el primer destino. Durante dichas protestas los manifestantes destruyeron la oficina del alcalde de un pequeño pueblo, pero fueron finalmente dispersados por la intervención de la policía nacional antidisturbios y una visita del Ministro del Interior.

La situación política de La Guajira también es volátil. El actual gobernador encargado, Wilbert José Hernández, enfrenta acusaciones de corrupción por promover un programa fraudulento de bilingüismo por un valor aproximado de once mil millones de pesos. El programa se licitó para prestar servicios a 38 municipios, sin embargo, La Guajira solo tiene 15. La investigación está en curso y Hernández fue suspendido desde finales de julio.

Seis candidatos compiten por suceder a Hernández en 2020, tres de los cuales disfrutaban de un apoyo significativo. El líder en encuestas de opinión pública es Nemesio Roys, formalmente inscrito por el Partido Conservador pero también cuenta con el apoyo de otros sectores, incluido el partido Cambio Radical. El apoyo de este partido es controversial pues en el pasado brindó su apoyo a Oneida Pinto, la dos veces alcalde del municipio de Albania y elegida gobernadora de Guajira, a quien se fue removida del cargo por estar implicada en hechos de corrupción relacionados con contratos gubernamentales.

Pese a la controversia, es muy probable que Roys gane las elecciones, seguido de Idelfonso Medina y Jorge Pérez, hijo de un ex gobernador. Los demás candidatos en la contienda se han postulado como independientes o con el apoyo de partidos alternativos menores y no se espera que ganen.

Pronóstico

El sentimiento popular en la región refleja el desencanto con los principales candidatos, los cuales, a ojos de los votantes, representan intereses políticos arraigados a nivel nacional, intereses comerciales familiares y locales. En cuanto a los grupos de oposición, se espera que ninguno de los principales candidatos cambie la relación del departamento con las compañías mineras predominantes. Sus campañas se han centrado en cuestiones de política social como el desarrollo urbano, mejores servicios públicos, una mejor manejo de los migrantes venezolanos y la seguridad. En términos generales, el clima empresarial será favorable a la inversión extranjera en los sectores extractivo y energético, pero sigue siendo relativamente opaco y propenso a riesgos de integridad, y no se espera que los resultados de las próximas elecciones cambien estas percepciones a mediano plazo.

REGION ANDINA

La región andina de Colombia contiene algunos de los centros urbanos con mayores recursos y la mayor densidad de población así como grandes extensiones de zonas rurales pobres y en conflicto. La región se extiende desde el centro de Colombia hasta la frontera con Venezuela, incluye a la capital del país, Bogotá, y a algunos municipios donde se ubican las mayores refinerías mineras y petroleras. La región tiene una concentración de industria e infraestructura más alta que el promedio, pero índices más bajos que el resto del país en pobreza extrema, producción de coca y minería ilegal, con la excepción de las regiones más orientales cerca de Venezuela. La región alberga las dos ciudades más grandes de Colombia, Bogotá y Medellín, que atraen a un gran número de empresas extranjeras.

Al igual que en otras partes de Colombia, la política local está dominada en gran medida por familias y empresas con intereses arraigados. Con excepción de Bogotá y Medellín, la gran mayoría de la región andina está orientada a nivel doméstico, centrada en las industrias tradicionales y la agricultura. Sin embargo, sigue siendo muy influyente a nivel nacional y presenta oportunidades atractivas para la inversión extranjera en muchos sectores.

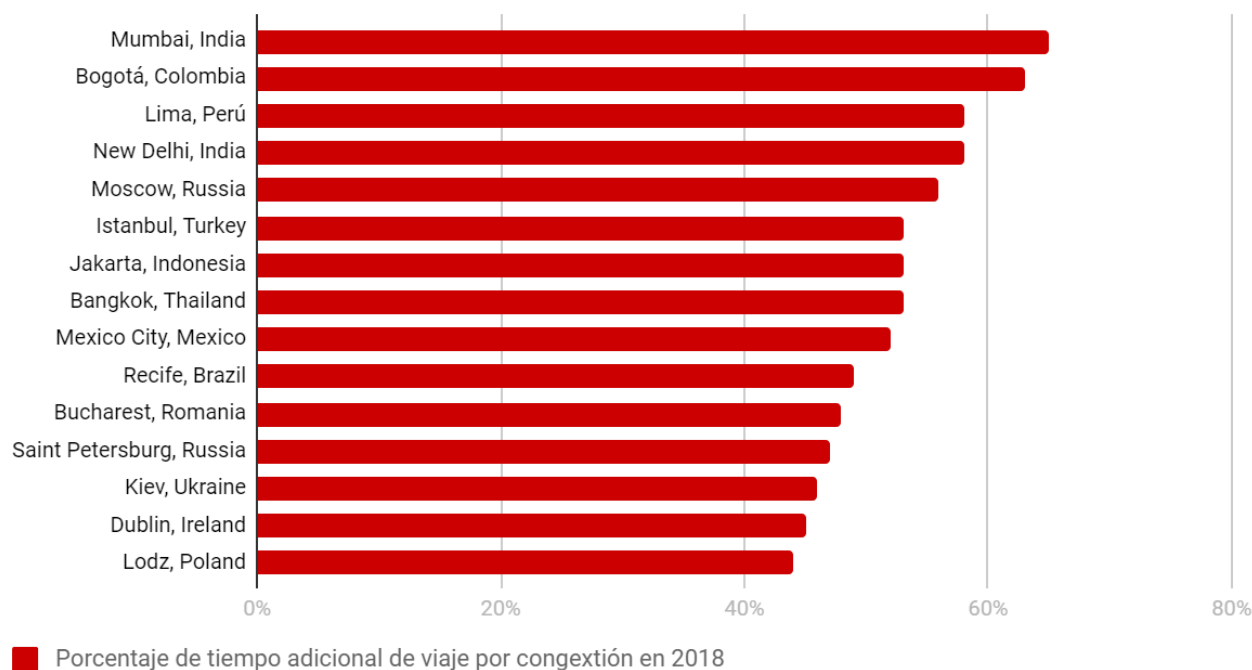
Bogotá, Distrito Capital

Bogotá es la quinta ciudad más grande de América Latina, con una población de 7.2 millones, mayor que el número de habitantes que cualquier departamento del país y equivalente al 15% de la población total del país. Es el centro geográfico, político y económico de Colombia, la sede de su gobierno nacional, hogar de casi el 50% de sus negocios medianos y grandes, y, desde 2018, ciudad donde se genera casi un tercio del PIB nominal de 330 mil millones de dólares del país. El actual alcalde de centro-derecha, Enrique Peñalosa, hizo campaña con la promesa de mejorar el transporte público, un tema que está demostrando ser clave en las campañas de los cuatro aspirantes para 2020.

A medida que la economía de Colombia crece en tamaño y sofisticación, la industria de producción y fabricación de Bogotá se ha reducido y los sectores de servicios se han desarrollado. La ciudad todavía produce innumerables bienes, desde productos agrícolas hasta textiles, productos químicos y maquinaria, pero su liderazgo apunta a una economía basada en servicios centrada en las finanzas, los bienes raíces, los seguros y otros sectores administrativos. Bogotá cuenta con una de las tasas de crecimiento económico más rápidas de América Latina, con un crecimiento del 3% año a año en 2018, mientras mantiene un costo de vida relativamente bajo. A pesar de no tener costa, la ciudad generó el 44% del comercio internacional del país, y también sirve de importante mercado para las regiones circundantes. Recibe una inversión extranjera directa significativa, principalmente de los Estados Unidos y la Unión Europea y alberga 1.500 corporaciones multinacionales.

El rápido crecimiento de Bogotá se debe, en parte, a la migración proveniente de zonas rurales del país y de municipios cercanos. Su población se ha duplicado en los últimos 30 años, pero, actualmente, la población de los municipios cercanos está creciendo a un ritmo aún más acelerado, lo que plantea desafíos administrativos a medida que la autoridad de la ciudad intenta coordinarse con sus vecinos. Los crímenes violentos han disminuido considerablemente en los últimos 15 años a pesar de la población en aumento, y, aunque persiste la delincuencia menor, la seguridad ha mejorado. El mayor problema en la actualidad, y el que pareciera inmanejable, es la infraestructura.

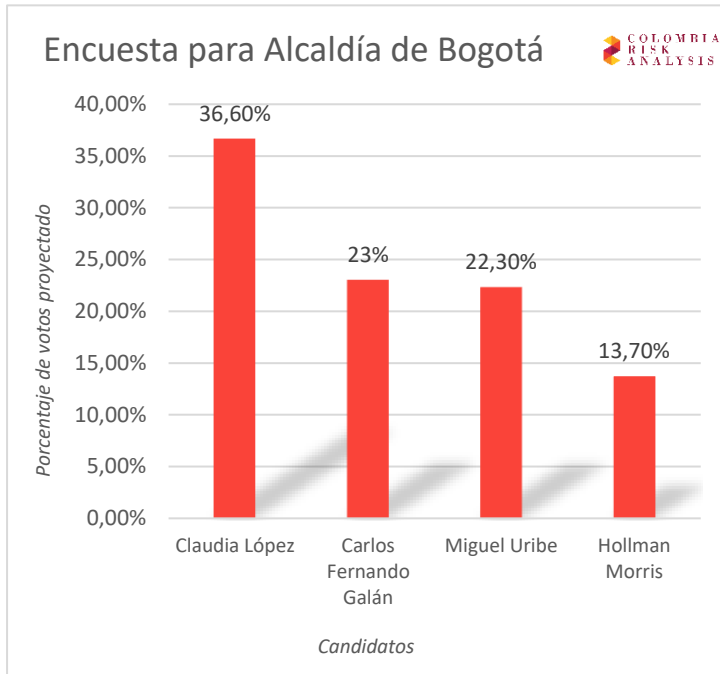
Ciudades con las peores congestiones de tráfico



Fuente: [TomTom Traffic Index, 2018](#)

Después de Mumbai, Bogotá es la segunda ciudad más congestionada del mundo, según el TomTom Traffic Index. Las mejoras en el transporte público y la infraestructura vial de Bogotá han sido un tema recurrente en la política local durante décadas. El sistema de autobuses de tránsito rápido (BRT) TransMilenio, inaugurado por Peñalosa durante su primer mandato como alcalde de 1998 a 2001, fue aclamado en su momento como una solución innovadora y eficiente; hoy, sobrepasa su capacidad. El sistema transporta un promedio diario de 2,4 millones de personas entre semana, a 148 estaciones y a lo largo de 114 km. El sistema se caracteriza hoy por hacinamiento severo, largos tiempos de viaje, delincuencia, inaccesibilidad de precios para los ciudadanos más pobres y contaminación del aire. Un escándalo de corrupción durante el mandato del ex alcalde Samuel Moreno Rojas, en 2011, por irregularidades en la contratación de las expansiones de TransMilenio solo aumentó la frustración pública con la congestión de la ciudad y provocó disturbios en 2012. Los candidatos en las próximas elecciones han prometiendo un sistema de metro completamente nuevo, pero hay desacuerdos sobre el diseño del proyecto. La licitación del metro de Bogotá se realizará el 21 de octubre, tan solo una semana antes de las elecciones.

Claudia López, la candidata más favorecida en las encuestas, está luchando por mantener su ventaja después de apoyar ambiguamente los planes tanto para el metro elevado (aunque prefiriendo la opción subterránea), enfureciendo a las facciones dentro de su coalición. Sus otros objetivos de campaña son combatir la corrupción y promover la "cultura ciudadana", una iniciativa de mejora social concebida por el ex alcalde Antanas Mockus, una figura estrechamente asociada con Peñalosa.



Fuente: [Invamer](#) September 6, 2019

Pronóstico

Bogotá se está moviendo hacia unas elecciones centradas en temas de interés más que en partidos políticos. Las encuestas sugieren que los votantes están más interesados en las propuestas de políticas de los candidatos en lugar de la afiliación al un partido específico. Además, la capacidad de los ex presidentes, como Álvaro Uribe y los ex alcaldes de Bogotá, como Gustavo Petro, para atraer a los votantes a sus candidatos preferidos es menor a la que muchos esperaban. La creciente presión sobre los candidatos para mejorar los servicios públicos de la ciudad, en particular el transporte, significa que las próximas elecciones pueden tener un fuerte impacto en el entorno empresarial de Bogotá, tanto a corto plazo, a través de nuevos contratos de planificación y construcción para grandes proyectos de infraestructura, como a largo plazo, mejorando la accesibilidad de la ciudad.

Antioquia (Medellín)

Antioquia es uno de los departamentos más ricos de Colombia y el segundo más poblado. Su capital, Medellín, se ha transformado de aquella ciudad asediada por el narcotráfico a una ciudad segura y moderna inundada de turistas y expatriados. El liderazgo de Antioquia promueve un crecimiento rápido y con visión de futuro a través de una maquinaria política estable y atenta a los intereses de las élites económicas del departamento. Las áreas rurales alrededor de Medellín también están relativamente bien cuidadas, y muchas ciudades pequeñas se benefician del eco-turismo. Sin embargo, la violencia, la actividad ilegal y el gobierno paramilitar persisten en la región norte del departamento, especialmente en el Bajo Cauca y cerca de la frontera con Chocó.

Antioquia alberga a 6 millones de personas de las cuales 2,5 millones viven en Medellín o sus alrededores. Su PIB es más alto que el promedio nacional y creció un 3% año a año en 2018, recuperándose del colapso global en 2015. Antioquia generó un impresionante 14.4% del PIB de Colombia en 2017, mientras que Medellín aportó más del 7%.

El departamento cuenta con una economía fuerte y diversa basada en el turismo, la tecnología y los servicios, la manufactura, la agricultura y la extracción de recursos naturales. En 2018, Antioquia produjo el 18% de las exportaciones no petroleras de Colombia, que consiste principalmente en metales preciosos, frutas, café y productos manufacturados. La mayoría de sus actividades movilizadoras de capital se concentran en Medellín, especialmente aquellas que dependen de capital humano, como servicios comerciales, investigación y educación superior. La ciudad es hogar del Grupo Empresarial Antioqueño, un conglomerado de negocios de aproximadamente 125 empresas, incluidas multilatinas, como Bancolombia y Grupo Argos, que influyen en las políticas económicas de la ciudad y dirigen su crecimiento.

La industria turística ha visto un crecimiento exponencial en la última década, convirtiendo a Medellín, y a la zona montañosa circundante, en una de los destinos vacacionales más populares de Colombia para locales y extranjeros. El crecimiento del turismo de Antioquia creció un 11% en 2018 año tras año. La inversión extranjera de multinacionales como UPS, Renault y Yamaha, por ejemplo, ha estado creciendo de manera constante durante la última década, con un aumento total de \$ 144 millones de dólares en 2008 a \$ 372 millones en 2017. La minería está arraigada a nivel histórico en Antioquia. En las montañas del departamento se extrae desde oro hasta cobre y materias primas de construcción. Sin embargo, un público más sofisticado y un alto grado de minería ilegal ha movido a la opinión pública en contra de la industria. Casi el 40% de la producción ilegal de oro en Colombia tiene lugar en Antioquia; Medellín es el mayor exportador de oro del país. Durante la última década, los gobiernos locales se han mostrado reacios a otorgar nuevas concesiones. En la ciudad turística de Jericó, por ejemplo, el alcalde se ha opuesto a la minería a favor de preservar su belleza natural, y los candidatos a la alcaldía y al concejo municipal de Jericó tienen un debate abierto sobre el futuro del proyecto. El caso de Jericó ha sido discutido en medios nacionales; es muy probable que con la atención mediática los opositores del proyecto examinen muy de cerca las decisiones del gobierno local.

Esta mayor sensibilidad política a la opinión pública, en oposición a los intereses comerciales, se refleja en quien ejerce actualmente el liderazgo en Antioquia y en las campañas de los candidatos. El gobernador de Antioquia, Luis Pérez, se ha centrado en reducir la pobreza, el desempleo y mejorar el acceso universal a los servicios y la educación, como se describe en su plan de cuatro años "Pensar en grande". Pérez también ha propuesto una legislación que restringe la minería, por ejemplo, limitando los terrenos disponibles para extracción a 15% del departamento.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien ha sido muy bien recibido por los ciudadanos, se lanzó como independiente y también centró sus esfuerzos en el embellecimiento de la ciudad, el turismo y una mejor calidad de vida para los ciudadanos. El énfasis de Pérez y Gutiérrez en los problemas sociales marca un distanciamiento del énfasis en la seguridad y el orden de campañas en años anteriores.

En las próximas elecciones para alcaldes y gobernadores, incluso los candidatos tradicionales se están presentando de una manera diferente a los votantes, distanciándose de las políticas derechistas uribistas por las que Antioquia es famosa. Los candidatos están centrando sus mensajes en la lucha contra la corrupción, mejorando la calidad de vida de todos los ciudadanos y mejorando la infraestructura.

El candidato favorito para la gobernación de Antioquia es Anibal Gaviria, un político experimentado, proveniente de una poderosa familia propietaria del conglomerado agrícola Grupo 20 y del periódico El Mundo. Fue gobernador de Antioquia entre 2004 y 2017 y alcalde de Medellín de 2012 a 2015; su candidatura actual es apoyada por el Partido de la U, Cambio Radical, el Partido Liberal y la Alianza Verde. El único contrincante de Gaviria con posibilidades en las urnas es Andrés Guerra, político uribista y director regional del Centro Democrático. Sin embargo, Guerra tiene poca experiencia política, está luchando contra las acusaciones de corrupción y tiene un puntaje bajo en las encuestas. Muchos ven las elecciones como una prueba de si la opinión popular en Antioquia todavía está impulsada por la lealtad a Uribe y su maquinaria política, o si ahora está motivada por el pragmatismo y los problemas sociales no partidistas.

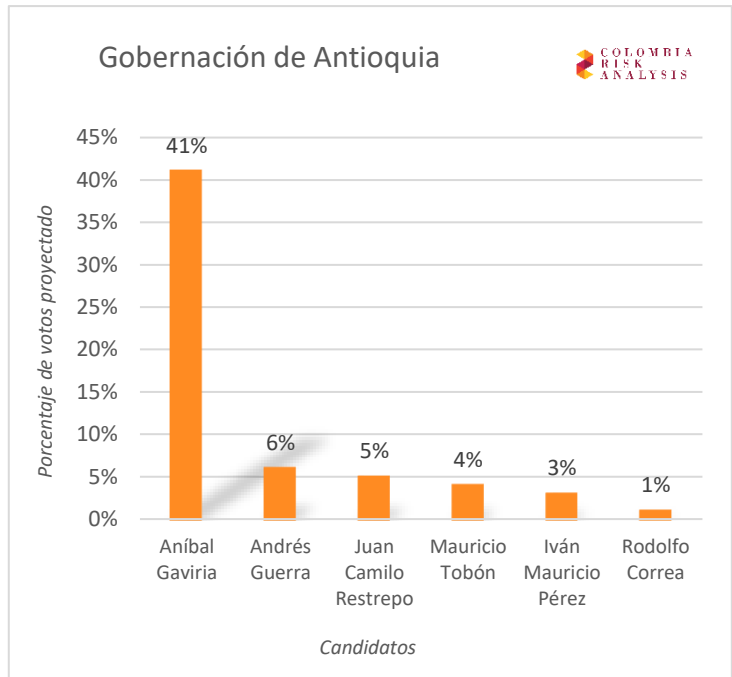
Los otros cinco candidatos a gobernador son Mauricio Tobón, un independiente, Rodolfo Correa, ex funcionario de Luis Pérez, e Iván Mauricio Pérez, quien tiene vínculos con el ex alcalde y gobernador Fajardo. También se postulan dos independientes con el apoyo de partidos alternativo: Juan Camilo Restrepo y Juan Felipe Palau.

La carrera por la alcaldía de Medellín también parece tener una conclusión inevitable. De los 15 candidatos que se postulan, uno se destaca: Alfredo Ramos con el Centro Democrático. Ramos, uribista, de una familia de élite e hijo de un ex alcalde de Medellín quien fue encarcelado por conexiones con paramilitares, representa intereses políticos y comerciales de larga data. Su campaña, intenta presentar una plataforma moderna y enfatiza la inclusión social, una mejor calidad de vida y una mayor transparencia gubernamental. Los dos candidatos que corren contra Ramos son Jesús Aníbal Echeverri, concejal de la ciudad durante 16 años apoyado por el Partido de la U, y Daniel Quintero, candidato con enfoque independiente que aboga por mejorar la educación y la innovación tecnológica de la ciudad.

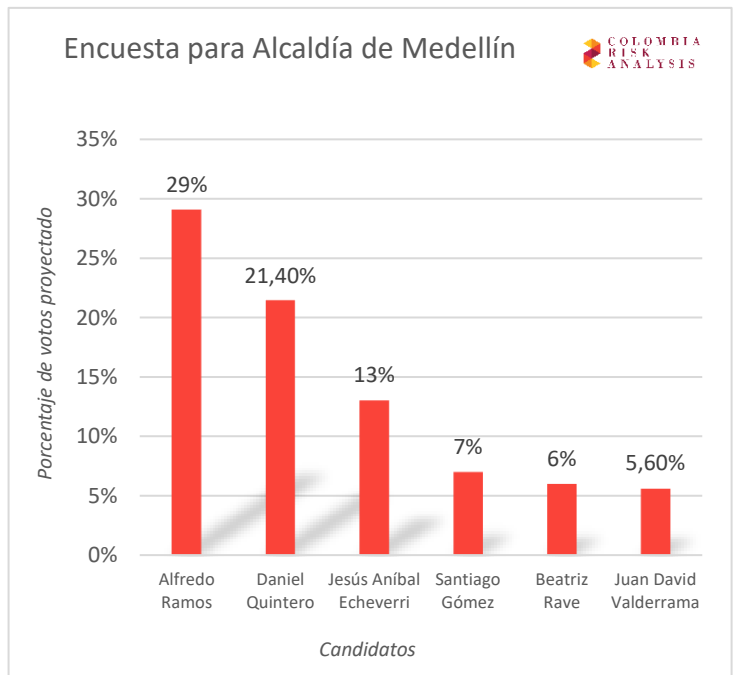
Pronóstico

Las elecciones en Antioquia y Medellín son las más importantes a nivel nacional después de Bogotá. En ambos casos el ganador seguramente mantendrá muchas de las políticas de sus predecesores y favorecerá la inversión extranjera moderna y responsable.

Con la excepción de los ciudadanos del norte del departamento, que sufren por la negligencia gubernamental, la violencia política y conflictos continuos, los que están en Medellín y sus alrededores están contentos con el progreso de su departamento. Un sentido de orgullo entre los antioqueños y su élite empresarial asegurará que los líderes de Medellín y Antioquia mantengan la economía creciendo en su trayectoria actual.



Fuente: [CNC](#) 17 de julio de 2019



Fuente: [Invamer](#) 6 de septiembre de 2019

Santander (Bucaramanga)

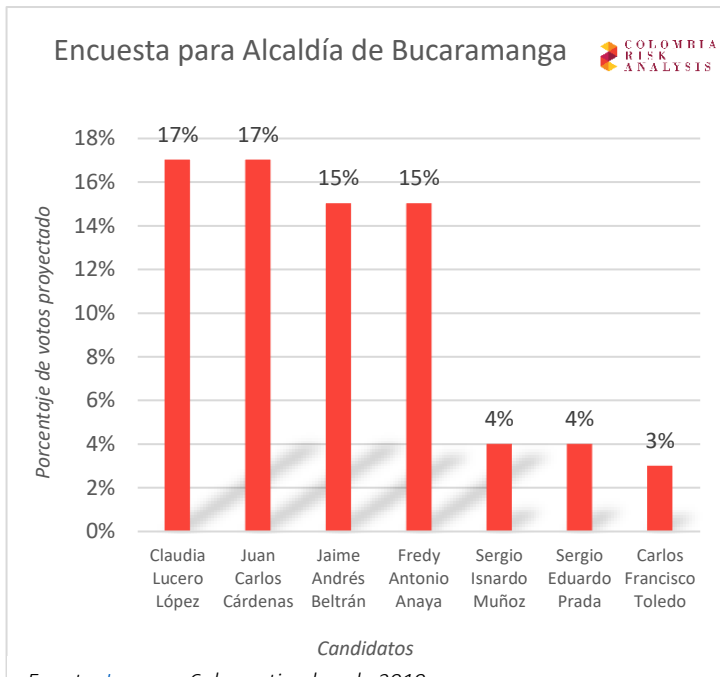
Santander, el sexto departamento más grande del país, una región bastante desarrollada, se caracteriza por estructuras económicas y políticas tradicionales. Su base económica agrícola se aceleró por la extensa infraestructura, el acceso al río y los vastos recursos naturales. En 2015 Santander produjo más del 8% del PIB nacional, lo que lo convierte en el cuarto departamento más productivo del país. También creció a una tasa del 3,2% año a año, en tercer lugar después de Antioquia y Bogotá DC. Más de 500,000 personas viven en su capital, Bucaramanga, ciudad que cuenta con una sólida economía de servicio y fabricación conocida por sus textiles y calzado. En la actualidad, se estima que 60,000 venezolanos viven en Santander, la mayoría de ellos concentrados en Bucaramanga. La política en el departamento ha sido tradicionalmente movida por las conexiones familiares y los intereses comerciales locales más que por preocupaciones ideológicas basadas en partidos, aunque el actual alcalde de Bucaramanga parece oponerse a esta tendencia.

La riqueza de Santander proviene de sus industrias extractivas, con minas de oro y plata al oriente del departamento y pozos de petróleo y refinerías al interior, cerca de Barrancabermeja. La mina más destacada del departamento es el proyecto Soto Norte, una mina subterránea de oro y cobre de \$ 1.200 millones de dólares en manos de la empresa minera Minesa, financiada por los Emiratos Árabes Unidos. La empresa se ha enfrentado protestas en cercanías a la mina en Bucaramanga; los manifestantes se oponen a la explotación de un área protegida conocida como el Páramo de Santurbán donde la minería está prohibida desde 2011. En el centro del departamento, la planta Ecopetrol en Barrancabermeja es la refinería de petróleo más grande del país, con una capacidad instalada de 250,000 barriles por día y capacidad de producir múltiples derivados, desde gasolina hasta asfalto y propano. Además de la agricultura y el procesamiento de alimentos, Santander también tiene una creciente industria turística en Bucaramanga gracias a sus aeropuertos y belleza natural.

El actual gobernador de Santander es Didier Tavera quién obtuvo la victoria en las pasadas elecciones de la mano del Partido Liberal. El padre de Tavera era un narcotraficante rico y cuya familia, después de su muerte, invirtió en los sectores del petróleo y la gasolina. Tavera permanece bajo investigación por corrupción e irregularidades en la asignación de contratos gubernamentales. El alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández Suárez, dista mucho de la polémica figura del gobernador. Hernández se postuló como independiente y se esforzó por involucrar a los ciudadanos en las decisiones de política pública. Sin embargo, los principales candidatos en las próximas elecciones representan mucho más a la maquinaria tradicional del partido.

Seis candidatos se postulan para reemplazar al gobernador Tavera, tres a la derecha y dos a la izquierda, varios de ellos con acusaciones de corrupción y paramilitarismo. El candidato por el Partido Conservador es Mauricio Aguilar, cuyo padre, Hugo Aguilar, fue encarcelado por vínculos con paramilitares. El ex gobernador Richard Aguilar, otro pariente cercano del candidato, fue acusado de corrupción. También a la derecha está Elkin Bueno, apoyado por Cambio Radical. Bueno fue alcalde de Barrancabermeja en tres oportunidades, también fue acusado de nexos con el paramilitarismo pero no fue encarcelado por escapó por poco del arresto por presunto paramilitarismo gracias a los vacíos legales del proceso en su contra. La última candidata de la derecha es Ángela Hernández, apoyada por Álvaro Uribe y un número grupos cristianos; Hernández ocupa un lugar bajo en las encuestas.

A la izquierda se encuentra Leonidas Gómez, con el apoyo del Polo Democrático y una amplia coalición de partidos alternativos incluida la Alianza Verde. Gómez se lanzó a la gobernación en 2015 pero quedó en segundo lugar; hoy se perfila como un candidato mucho más fuerte. También de centro-izquierda está David Suárez, que se presenta como candidato independiente. Suárez tiene condenas previas de fraude electoral a favor de sus aliados políticos y lazos estrechos con políticos locales bajo investigación. Finalmente está Emiro Arias, quien también se lanzó como independiente y pese a que se esperaba que apoyara la candidatura de Gómez ya que fue su gerente de campaña al Senado.



Diez candidatos están en contienda por la alcaldía de Bucaramanga, pero la carrera se puede reducir a cuatro. Según la empresa encuestadora Invamer, Claudia López del Centro Democrático es líder en la apretada contienda. La siguen Juan Carlos Cárdenas y Jaime Andrés Beltrán quienes son seguidos de cerca por Fredy Anaya, el candidato de centro-derecha, quién tiene el apoyo de Colombia Justa Libres y del actual gobernador. Finalmente está Sergio Isnardo Muñoz quién está avalado por una coalición de MAIS con ASI, pero quién también extrañamente tiene afiliación con los partidos tradicionales y Aguilar.

Pronóstico

Los fuertes lazos políticos entre los candidatos de casi todos los partidos sugiere que es poco probable que el resultado de las elecciones altere el status quo, sin importar quién sea elegido entre los principales candidatos. El departamento presenta oportunidades significativas para la inversión en muchos sectores, desde el turismo hasta la industria y la infraestructura. La geografía de Santander, el desarrollo relativamente alto y su diversidad económica, lo hacen atractivo para la inversión extranjera. Sin embargo, los riesgos de integridad persisten debido a los intereses comerciales arraigados y la falta de transparencia administrativa.

Boyacá

Boyacá, ubicado entre Cundinamarca y Venezuela, es un departamento con una variedad de regiones que se caracteriza ambiguamente por sus buenos indicadores de desarrollo y gobernanza, pero también por el desempleo, pobreza rural e industria ilegal. Sigue estando entre los 10 departamentos más competitivos del país, con índices de corrupción, evasión fiscal y delitos violentos por debajo del promedio nacional, así como una alta tasa de alfabetización y escolarización.

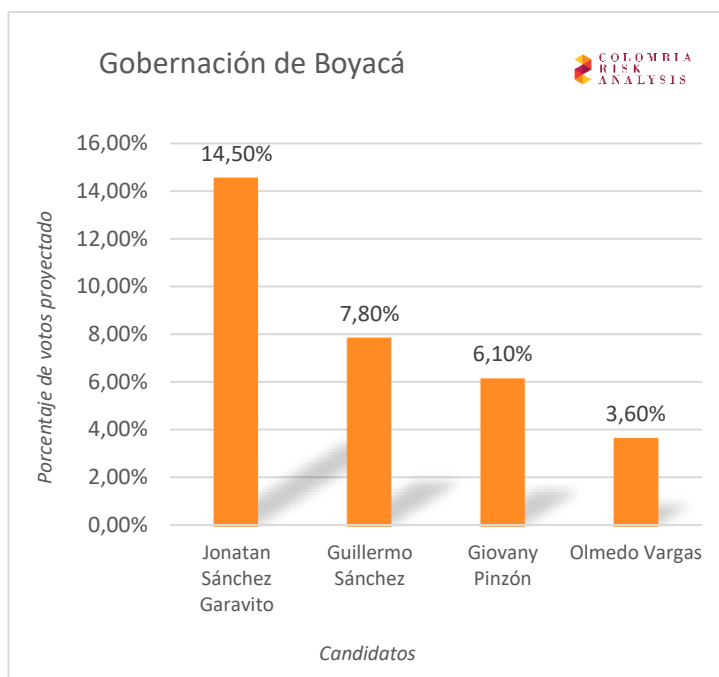
A nivel económico el departamento es débil produciendo sólo alrededor del 3% del PIB nacional. La producción se centra en la agricultura, el procesamiento de alimentos y la minería. Alrededor del 90% de la producción industrial del departamento se concentra en el centro-suroeste del país, en el llamado "corredor industrial" entre la capital del departamento, Tunja y Sogamoso. La producción de alimentos se centra en la caña de azúcar, el café, el cacao, el ganado y los productos lácteos. En cuanto a transporte y distribución, cuenta con infraestructuras y buenas carreteras que conducen a Bogotá así como amplio acceso al río Magdalena. En otras partes de la región, los proyectos mineros y de extracción de petróleo continúan con el apoyo del gobierno, incluida la mina de esmeraldas más grande del país en Chivos, al este de Boyacá. A pesar de algunos problemas recientes con grupos ambientalistas, la minería es bien aceptada como una fuente importante de ingresos.

El desarrollo general de Boyacá se mantiene alrededor del promedio nacional, ya que, lejos de la capital del departamento, muchas áreas dependen de la agricultura tradicional de bajo capital. La infraestructura es modesta, con cuatro carreteras principales, pero sin vía férrea o rutas alternativas robustas. Aproximadamente un tercio de la población sigue en la pobreza, y dada la baja densidad de población y los municipios pequeños,

es difícil para los gobiernos locales coordinar y financiar infraestructura a gran escala. Aunque la situación está cambiando gracias a la migración venezolana, el departamento experimentó, durante muchos años, una migración neta negativa.

La cultura política de Boyacá eclipsa sus contribuciones económicas; de esta región han salido catorce presidentes y muchas figuras políticas, culturales e intelectuales prominentes. A pesar de la pobreza rural y los recursos naturales, los conflictos y los delitos violentos en el departamento se han mantenido en índices bajos lo cual es un testamento a la cultura cívica de la región. El actual gobernador de Boyacá es Carlos Amaya, un joven miembro de la Alianza Verde respaldado por una coalición de partidos pequeños de centro y de centro-izquierda. Amaya basó su campaña en el desarrollo de áreas marginadas y, como parte central de su plataforma política, se ha opuesto al fracking.

Hay cinco candidatos en campaña por la gobernación de Boyacá, el favorito, según las encuestas, es Olmedo Vargas, independiente, con el apoyo del partido Colombia Renaciente, seguido en el centro-izquierda por Giovany Pinzón con MAIS, y Ramiro Barragán con el apoyo de la Alianza Verde y el Partido Liberal, este último con la intención de continuar con las políticas de su predecesor. Los candidatos de derecha son Jonatan Sánchez, corriendo con el apoyo del Partido Conservador, Cambio Radical, Centro Democrático, Alianza Social Independiente, Álvaro Uribe y Jairo Castiblanco.



Fuente: [Yanhaas](#) 18 de julio de 2019

Pronóstico

La elección por la gobernación de Boyacá es realmente entre la Alianza Verde, partido que lucha por retener el poder a través de Barragán y reivindicar sus políticas, y una coalición de derecha que se opone a ellas. Dada su cercanía a Bogotá, en muchos sentidos, las elecciones en Boyacá pueden interpretarse como un espejo de la tensión nacional entre los partidos más ideológicos de derecha y los partidos de izquierda. El entorno empresarial de Boyacá ya es favorable gracias a su burocracia efectiva, y es poco probable que las elecciones cambien esto. En realidad, los desafíos para la inversión extranjera provienen más de la falta de demanda obvia en el departamento que de cualquier oposición política o inseguridad.

REGION PACIFICO

La región del Pacífico es a la vez una de las regiones económicas más importantes y descuidadas de Colombia, con una historia política difícil que ha impedido el desarrollo de su vasto potencial y ha relegado a muchos de sus ciudadanos a una lucha constante contra la pobreza y el abandono. En el Valle del Cauca, el puerto de Buenaventura recibe el 60% de las importaciones marítimas de Colombia a pesar de su infraestructura deteriorada, acceso de vías limitado, así como la pobreza y crimen generalizados. En la capital del departamento, Cali, el turismo y la economía están creciendo a pesar de los importantes desafíos de seguridad y desarrollo en sus periferias. Más al norte, en Chocó, los servicios básicos son un lujo y los temas de conflicto

y desempleo dominan las discusiones políticas. El fraude electoral es común, y muchos dudan del poder, o voluntad, del gobierno para actuar en su interés.

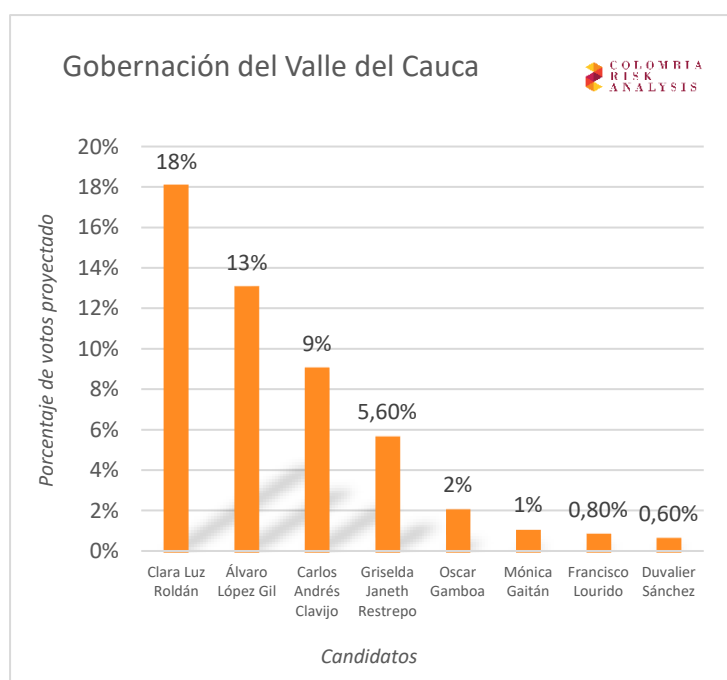
En cuanto al clima de negocios, las zonas más desarrolladas del Pacífico ofrecen servicios de clase mundial y apoyo a la inversión, especialmente en tecnología, infraestructura y turismo. Pero en los municipios pobres, los riesgos de seguridad e integridad siguen siendo extremadamente altos y, en muchos casos, el gobierno local y nacional solo tiene el control nominal del territorio.

Valle del Cauca (Cali)

El departamento más rico y poblado del Pacífico, Valle del Cauca, alberga la tercera ciudad más grande de Colombia, Cali, y su puerto más grande, Buenaventura. En importancia económica le sigue a Cundinamarca y Antioquia, aunque está mucho menos desarrollado que cualquiera de ellos, con vastas franjas de áreas rurales mal conectadas e infraestructura inadecuada u obsoleta incluso en sus principales ciudades. A pesar de un bajo nivel de conflicto en relación con su vecino del sur, Cauca, el departamento todavía está luchando con la producción de coca y los altos niveles de inseguridad en ciertas áreas.

El PIB de Cali alcanzó los \$28 mil millones de pesos en 2017, con una tasa de crecimiento del 2.2% año a año. La principal actividad económica del departamento es la agricultura, con una importante producción de azúcar, tabaco, café y frutas que domina su campo, seguida de grandes pesquerías a lo largo de la costa. La fabricación de materiales de construcción, papel y madera, y los servicios de salud están bien establecida, junto con la minería no metálica.

El activo económico más fuerte del departamento es su puerto de Buenaventura en la costa del Pacífico, que en 2017 representó el 42% del comercio internacional de Colombia. El puerto cuenta con 14 terminales, dos de las cuales son operadas por compañías extranjeras, y está equipado para manejar múltiples tipos de carga y embarcación. Sin embargo, la infraestructura alrededor del puerto y en Cali sigue siendo relativamente débil en comparación con la cantidad de comercio que soporta. El ferrocarril industrial entre Cali y Buenaventura está fuera de servicio, y la ruta principal es una carretera bien pavimentada pero estrecha y sinuosa a través de las montañas salpicadas por puntos de control militares.



Fuente: [WAA](#) 9 de junio de 2019

Múltiples industrias ilegales están presentes en el departamento, alimentadas por la pobreza y el alto desempleo, que a pesar de las recientes mejoras, el gobierno no ha podido reducir lo suficiente. La pesca ilegal, la producción de madera, la extracción de oro y la producción de coca están muy extendidas en las áreas menos desarrolladas del departamento, y Cali sigue siendo una de las ciudades más violentas de Colombia. Según La Silla Vacía, al menos nueve candidatos políticos en todo el departamento han sido amenazados, atacados o asesinados en los meses previos a las elecciones de octubre.

Dilian Francisca Toro, la actual gobernadora del Valle del Cauca, una política de derecha, uribista, con años de experiencia a nivel nacional y local, está bajo investigación por lavar dinero para paramilitares.

Paradójicamente, el mandato de Toro estuvo centrado en combatir el narcotráfico, mejorar la seguridad y el empleo en todo el departamento. Su sucesora elegida y la candidata más probable a ganar las elecciones, Clara Luz Roldán, ha prometido seguir sus pasos. Además del apoyo de Toro, Roldán está respaldada por una gran coalición de partidos, como el Partido de la U, el Partido Liberal, Cambio Radical y Colombia Renaciente, así como partidos alternativos más pequeños y congresistas independientes. Roldán también está bajo investigación por irregularidades en contratos.

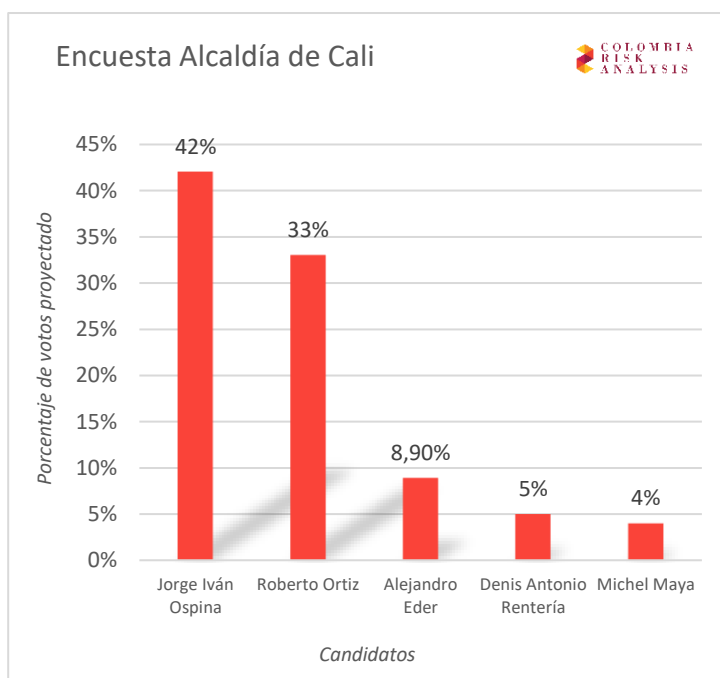
Los otros siete candidatos a la gobernación están divididos por ideología. Cuatro se alinean a izquierda, ya sea de forma independiente o con el apoyo de partidos menores, centrándose en la paz y la reconciliación y las preocupaciones ambientales anti-minería. Los tres candidatos restantes se ubican a la derecha en el espectro político, también con el apoyo de partidos más pequeños, y adoptan un enfoque de línea dura hacia el conflicto y la seguridad con fuertes críticas hacia el acuerdo de paz.

En la capital de Valle del Cauca la política está menos determinada por las preocupaciones sobre el conflicto y el narcotráfico. El actual alcalde, Norman Maurice Armitage, es un prominente filántropo y empresario que se postula como independiente de centro izquierda con apoyo popular. Ha tomado posiciones progresistas en temas sociales, enfatizando los beneficios sociales para los trabajadores y apoyando un enfoque diplomático para poner fin al conflicto. Armitage se ha centrado sobre todo en la seguridad de la ciudad y en la disminución del desempleo, especialmente mediante la promoción del turismo.

Hay nueve candidatos postulados para tomar su lugar como alcalde de Cali, dos de los cuales tienen buenas probabilidades de lograrlo. El primero es Jorge Iván Ospina, otro candidato de centro izquierda apoyado por la Alianza Verde y el Partido Liberal. A Ospina se le asocia con el ex alcalde izquierdista de Bogotá, Gustavo Petro, y tiene lazos familiares con ex guerrilleros antigubernamentales. Es conocido en Cali por su mandato como alcalde en 2007, durante el cual promovió proyectos de infraestructura masivos, construyó caminos, puentes y andenes muy necesarios; actualmente su campaña se centra en obras y objetivos similares. El oponente de Ospina en las encuestas es Roberto Ortiz, empresario y propietario de lotería, con un fuerte apoyo entre la clase trabajadora y los partidos tradicionales de derecha como Centro Democrático y el Partido Conservador. Esta es la segunda campaña de Ospina a la alcaldía de Cali después de perder las últimas elecciones por solo 180,000 votos. Otros dos candidatos con posibilidades son Michel Maya, un político de centro-derecha independiente con apoyo de ASI y vinculado a Claudia López en Bogotá, y Alejandro Eder, político de una prominente familia de negocios que representa la clase empresarial de Cali.

Pronóstico

Si bien la elección de Clara Luz Roldán como gobernadora es casi una certeza, el próximo alcalde de Cali es más difícil de predecir. Entre Ospina y Ortiz, es mucho más probable que el primero continúe con las políticas de Armitage, adoptando estrategias alternativas contra la producción de coca y la resolución de conflictos,



Fuente: [Invamer](#) 6 de septiembre de 2019

mientras mantiene controles más estrictos sobre las industrias ambientalmente sensibles. Ortiz, por otro lado, probablemente daría un giro hacia la derecha, más en línea con la política nacional. Sin embargo, los candidatos parecen no estar motivados por factores ideológicos, cada uno ha presentado una actitud pragmática y de resolución de problemas que reconoce la inversión extranjera como una fuente importante de modernización e ingresos.

Chocó

Chocó, uno de los departamentos de mayor extensión territorial y escasamente poblado, que limita con el océano Pacífico al occidente y Panamá al norte, es uno de los departamentos más pobres y marginados políticamente de Colombia, que experimenta conflictos y pobreza significativos a pesar de sus recursos naturales. Sus aproximadamente 500,000 ciudadanos son principalmente afrocolombianos e indígenas con derechos especiales sobre la tierra, lo que complica la gobernanza y el desarrollo. Casi una cuarta parte de la población se concentra en la capital del departamento, Quibdó.

La economía del Chocó es pobre en comparación con el resto del país, y muchos ciudadanos carecen de necesidades básicas como la electricidad y las carreteras. Más del 16% de las personas en Quibdó estaban desempleadas, mientras que el promedio departamental se situó justo por debajo del promedio nacional en 9.6%. Los ingresos de la región provienen de la agricultura, la pesca y la ganadería, o la extracción de metales preciosos como el platino, oro, plata, piedra caliza y cobre.

La mayoría de la tierra en Chocó tiene potencial minero, y el gobierno local favorece los proyectos mineros a gran escala, que atrae mediante la subasta de títulos de propiedad mediante el uso de Áreas Estratégicas de Minería. Varias multinacionales operan en Chocó, por ejemplo, Anglo American Colombia Exploration, Rio Tinto Mining y Continental Gold, aunque el área también alberga a muchas compañías más pequeñas. A pesar de la actitud pro minería del gobierno, los proyectos a menudo se estancan en la etapa de consulta previa y negociaciones con grupos indígenas y afrocolombianos. Casi el 95% de la población del Chocó es indígena o afrodescendiente y vive en tierras en donde tiene protecciones constitucionales especiales.

En consecuencia, Chocó es la región con la mayor incidencia de minería ilegal de oro con un 39% del total, justo por encima de Antioquia. Aproximadamente una cuarta parte del oro ilegal del país se extrae en Chocó, lo cual es facilitado por la pobreza, la ilegalidad y la conflictividad presente en el departamento. Además de la minería, la producción de coca está muy extendida y muchas áreas están controladas por grupos narcotraficantes, paramilitares o insurgencias de izquierda. Además, la difícil geografía y las fuertes lluvias obstaculizan el uso de la infraestructura ya escasa, y la mayor parte del comercio y los viajes del departamento se realizan por mar o río. Sin embargo, los fondos internacionales se abren camino hacia la capital de la ciudad y hacia proyectos mineros, particularmente de países con una alta demanda de recursos naturales y fácil acceso a los puertos del Pacífico.

La política en Chocó se enfoca estrechamente en combatir la producción de coca, poner fin al conflicto y combatir la corrupción, ninguno de los cuales ha sido particularmente exitoso. El gobernador del Chocó, Jhoany Carlos Palacios, habló en agosto de las dificultades causadas por el desplazamiento, la guerra entre el ELN y los paramilitares, economías ilegales y la reciente presencia de miembros los carteles mexicanos.

Cinco candidatos se postulan para gobernador, todos los cuales tienen orientación de centro derecha y deberán asumir los mismos problemas que su predecesor. Melecio Quinto Arias es el candidato de derecha más extremo. Un exmilitar uribista que se lanzó y se quemó en el 2015, y ahora se lanza nuevamente por el Centro Democrático. Patrocinio Montes de Oca, ex alcalde de Quibdó, se postula con la Alianza Afrocolombiana (AC) y tiene antecedentes penales por corrupción. También se considera de derecha y amenaza con quitarle el apoyo de un importante sector del Centro Democrático a Arias.

Los otros tres candidatos son: Ariel Palacios, quien se postula por el Partido Liberal, cuyo director local tiene cinco investigaciones diferentes por corrupción, y cuenta también con el apoyo del Partido Conservador, la Alianza Verde y Colombia Justa y Libres al igual que otros partidos más pequeños. Luis Enrique Abadía, un local con experiencia política significativa que se ejecuta de forma independiente con el apoyo del partido de la U y la Alianza Social Independiente. Y Nigeria Rentería Lozano, una abogada que también se postula de forma independiente con el apoyo de Cambio Radical y otros políticos locales.

Pronóstico

Las diferencias entre los candidatos no son particularmente notables porque los problemas del departamento de conflicto, narcotráfico y seguridad se superponen a las diferencias en los programas de campaña. Quien sea elegido deberá continuar luchando contra los inmensos retos que dejan poco espacio para generar impacto económico y social. Con respecto al clima de negocios del departamento, la combinación de infraestructura deficiente, baja población, ilegalidad y oposición política de grupos indígenas y afrocolombianos presenta desafíos importantes fuera de Quibdó. Sin embargo, los importantes recursos minerales que alberga el departamento hacen que este sea atractivo para aquellos inversores dispuestos a aceptar un cierto grado de riesgo.

LA ORINOQUIA Y LA AMAZONIA

Un vasto territorio al sur de Bogotá, las regiones de Orinoquía y Amazonas contienen las áreas menos desarrolladas y pobladas del país con largas historias de guerrillas, narcotráfico y abandono estatal. Las economías se basan en la agricultura y la extracción de recursos naturales, y el desarrollo se ve obstaculizado por grandes distancias geográficas, profundas divisiones sociales y la corrupción. A diferencia de las áreas mejor conectadas, la política en estas regiones todavía se centra en el conflicto, la mejora de las conexiones a los mercados internos y la provisión de necesidades básicas.

Meta (Villavicencio)

Inmediatamente al sur de Bogotá se encuentra Meta y su capital de rápido crecimiento, Villavicencio. La mayor parte de la población y la industria del departamento se encuentra aquí, en el lado sur de las montañas de los Andes, mientras que hacia el sureste se extienden llanuras, bosques y ríos escasamente poblados. La economía del departamento se basa en la venta de productos agrícolas a Bogotá y los ingresos de algunos de los campos petroleros más antiguos y más grandes del país. También alberga una importante producción ilegal de coca y una vez tuvo una marcada presencia de grupos guerrilleros.

Con la excepción de Villavicencio, a solo tres horas en automóvil desde Bogotá, y algunas ciudades a lo largo de las dos carreteras principales del departamento, los ciudadanos de Meta viven de la agricultura de bajo rendimiento. La ganadería, la pesca y todas las formas de producción de alimentos constituyen las mayores exportaciones de la región, y el departamento depende en gran medida de Bogotá como su mayor mercado. El otro pilar de la economía de Meta es la producción de petróleo en la cuenca de los Llanos, un gran depósito de petróleo en la parte oriental del departamento con múltiples campos petroleros, particularmente alrededor de Puerto Gaitán, que ha sido explotado desde la década de los 80. Aunque se considera una cuenca madura con casi la mitad de los 863,000 barriles de Colombia provenientes de ella en 2018, la exploración en Meta continúa sin disminuir.

La infraestructura es un problema importante en Meta debido a los deslizamientos de tierra, que frecuentemente cortan grandes áreas del departamento de la capital y, en especial, Bogotá. Además de sus dos autopistas, una que corre de este a oeste justo al sur de los Andes, y la otra que corre de norte a sur desde Villavicencio, Meta está formada por pequeños caminos rurales que carecen de rutas alternativas. El

deslizamiento de tierra más reciente a principios de mayo desconectó las llanuras orientales del resto del país, evitando que los cultivos lleguen a los mercados y reduciendo el turismo en un 55% en mayo y junio.

Finalmente, la minería ilegal y la producción de coca están presentes en el sur, que está escasamente poblado y en algunas áreas el estado ha perdido el control a grupos disidentes, paramilitares y bandas dedicadas al narcotráfico. La gobernabilidad en estas áreas es difícil, debido a la falta de infraestructura, pobreza generalizada y altas tasas de crimen violento.

La actual gobernadora de Meta es Claudia Marcela Amaya, quien tiene el apoyo del Partido Liberal y de la U. Durante más de una década representó a Meta en el Congreso, centrándose en los derechos de las mujeres, el cuidado de los niños y los problemas de salud sexual. Y como gobernadora de Meta, enfatizó una mejor atención médica y protección del medio ambiente. Cinco candidatos se postulan para sucederle, cada uno con una discreta posibilidad de éxito. Primero y principal es Nohora Tovar, una candidata de centro derecha que se postula con el apoyo del Centro Democrático y el ex presidente Uribe. Al igual que en Boyacá, Cali y otros lugares, espera que el departamento vire a la derecha y siga la misma línea del gobierno. Ha mencionado que de ser elegida tendrá mayor éxito en conseguir fondos para el departamento dada su afinidad política.

A su izquierda están Juan Guillermo Zuluaga y Arley Gómez. Zuluaga es un candidato tradicional y cuenta con el respaldo del Partido Conservador, el Partido Liberal y también ha sido respaldada por la gobernadora Amaya. La Alianza Verde y los partidos alternativos, en cambio, están apoyando a Gómez, un independiente que ha confiado en las redes sociales para lanzar una campaña poco ortodoxa que se presenta como una nueva cara que cambiará la política. El cuarto candidato es Juan Diego Muñoz con Colombia Justa Libres, que está haciendo campaña para mejorar la gobernanza local y financiar las regiones pobres, pero se ve obstaculizado por una investigación de corrupción en curso. Y el último candidato es Antonio Cuéllar de la Alianza Afro-Colombian, un ex. alcalde local que lucha contra las acusaciones de compra de votos.

El actual alcalde de Villavicencio, Wilmar Barbosa Rozo, es un uribista que obtuvo una gran victoria con el apoyo de Cambio Radical. Ha centrado su mandato en mejoras a centros de salud, carreteras y educación para la ciudad, así como en hacerla más habitable y dar prioridad al turismo a través de parques y embellecimiento público. De los once candidatos para estas elecciones, el principal candidato es Juan Felipe Harman, de centro-izquierda, quien se lanza como independiente y enfoca su campaña en la protección de los bienes públicos y la mejora de los servicios. Otros candidatos con una orientación de centro-derecha son Fabián Torres Carrillo con Cambio Radical y Lucy Saenz con el Partido de la U, a pesar de las acusaciones sobre corrupción que caen sobre ella. A la derecha están Alexander Baquero Sanabria del Partido Conservador y José Luis Silva, que esperaba tener el aval del Centro Democrático pero terminó bajo las toldas de la Alianza Social Independiente. Ambos candidatos buscan alinear las políticas locales con las del gobierno nacional, que adopta un enfoque más escéptico sobre el acuerdo de paz y la integración política y social de los exguerrilleros, un problema creciente en el sur y el este del departamento.

Pronóstico

No importa quién gane las elecciones, las barreras más importantes para la inversión en Meta son la infraestructura deficiente, la distancia de los mercados, la madurez de la industria extractiva y la inseguridad. En Villavicencio, el alcalde debe apersonarse de las preocupaciones de medio millón de votantes cuyas prioridades son mejorar su calidad de vida, la modernización y encontrar mejores oportunidades de empleo. En cambio, el gobernador de Meta debe abordar el crecimiento holístico de una región subdesarrollada que lucha con una infraestructura extremadamente inadecuada, una dependencia excesiva del petróleo y enfrentar al narcotráfico y a los grupos criminales.

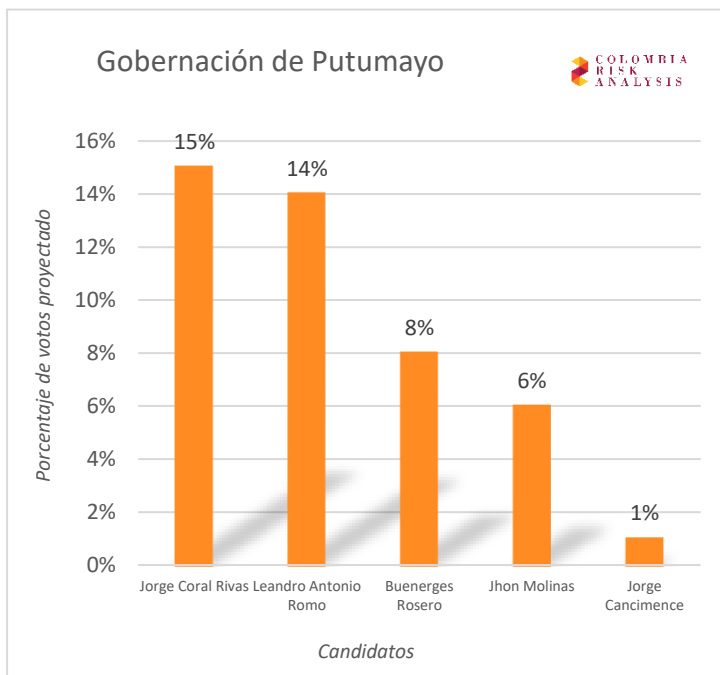
Es probable que los candidatos de centro- izquierda como Harman, Zuluaga o Gómez adopten una postura combativa hacia el gobierno nacional, enfatizando los derechos ambientales, los derechos indígenas y en

cambio promuevan posturas en vías del cumplimiento del acuerdo de paz. Por otro lado, los candidatos de derecha sean capaces de gestionar con mayor eficiencia fondos del gobierno (algo que han enfatizado en campaña), pero también corren el riesgo de aumentar las tensiones o incluso expandir las áreas de conflicto. Es poco probable que cualquier candidato pueda realizar mejoras a corto plazo en las carreteras, el sistema de títulos de propiedad y la infraestructura en la región, independientemente de su orientación política. La inversión extranjera en Meta probablemente seguirá concentrada en Villavicencio y los municipios productores de petróleo como Puerto Gaitán, y dependerá de las redes comerciales y logísticas existentes.

Putumayo

Putumayo es otro departamento remoto en el sur de Colombia con una larga historia de conflicto y abandono estatal. Ubicado en la frontera con Ecuador en el sureste de Colombia, es rico en recursos naturales, que incluyen minería, caucho, madera y petróleo. Del mismo modo también es una de las regiones productoras de coca más grandes del país. El departamento tiene una infraestructura vial y energética limitada, lo que impide el desarrollo. Adicional a esto existen grupos insurgentes dedicados a la minería ilegal, la producción de cocaína.

Putumayo es una de las regiones más pobres y menos pobladas de Colombia, con la mayoría de sus 380,000 ciudadanos viviendo de la agricultura, la pesca o la ganadería. Las operaciones de perforación y minería han estado presentes desde la década de los 60 y son las fuentes más importantes de ingresos, atraen la mayor cantidad de capital y son importantes fuentes de empleo. La minería ilegal, la explotación de recursos maderables y el cultivo de coca, gestionados por narcotraficantes, paramilitares y guerrilleros de izquierda operan prácticamente con impunidad en las regiones del sur de Putumayo. A partir de 2015, Putumayo produjo cerca del 14% de toda la coca del país, por encima de cualquier otro departamento. Esta y otras actividades ilegales son facilitadas por la frontera de 186 km de largo que tiene el departamento con Ecuador y una extensa red fluvial, que los delincuentes y la guerrilla utilizan para evitar las fuerzas estatales.



Fuente: [Cifras & Conceptos](#) 2 de septiembre de 2019

Los numerosos ríos del departamento son el método de transporte más importante dentro de Putumayo y hacia Ecuador y los departamentos limítrofes. Por el contrario, las carreteras son cortas, estrechas y limitadas al área occidental del departamento, donde también se encuentran sus dos aeropuertos. La infraestructura también es deficiente en las áreas más desarrolladas de Putumayo. Por ejemplo, en 2017, las fuertes lluvias causaron inundaciones y deslizamientos de tierra que mataron a más de 250 personas e hirieron a casi 400 en su capital, Mocoa.

Dados los serios desafíos que enfrenta el gobierno, la política de Putumayo se define por la resolución de conflictos, una sensación de olvido por parte del gobierno nacional, la violencia contra los líderes sociales y la provisión de necesidades básicas. La actual gobernadora de Putumayo, hizo campaña como una gobernadora "posconflicto" con la

Alianza Verde que iniciaría la reconciliación y aportaría fondos a las zonas afectadas por la guerra, haciendo hincapié en las necesidades de los ciudadanos rurales, afro e indígenas. En particular, prometió abordar los problemas que enfrenta la Minga, uno de los grupos indígenas más grandes y políticamente más activos de

Putumayo que durante mucho tiempo ha estado solicitando al gobierno nacional los derechos sobre sus tierras ancestrales y un sistema claro de adquisición de títulos de tierras.

Cinco candidatos están haciendo campaña para suceder a Aroca, pero ninguno hasta ahora ha surgido como un líder claro en la contienda. El primer candidato es el ex alcalde de Puerto Asís, Jorge Coral Rivas, apoyado por la Alianza Afro-Colombiana. Este es su segundo intento después de que su candidatura en 2015 fue interrumpida por su captura por presuntos cargos de corrupción una semana antes de las elecciones. Originalmente buscó el apoyo del partido Conservador, que le negó el aval y se lo entregó a Jhon Molinas, ex director de la compañía de energía pública de Putumayo. Otro candidato es Leandro Antonio Romo, también ex alcalde con el apoyo del Partido Liberal. Los otros dos contendores son Buenerges Rosero, con la Alianza Social Independiente, y Jorge Cancimence, de Colombia Humana.

Pronóstico

A pesar de algunos avances desde el Acuerdo de Paz, Putumayo sigue siendo una región muy descuidada por el estado en donde existen dinámicas sociales y económicas que impiden el crecimiento y el desarrollo. El departamento aún sufre dado el conflicto, la inmensa pobreza que existe, y algunos desafíos como inundaciones y deslizamientos de tierra que, junto con la débil infraestructura son un obstáculo para el desarrollo económico. Para muchos de los ciudadanos de Putumayo, especialmente grupos indígenas, el gobierno representa un poder neutral, si no hostil a su forma de vida. Sin importar el resultado de las elecciones, el próximo gobernador deberá enfocarse en reducir la violencia, tanto en las ciudades como en las zonas rurales, combatir las economías ilegales arraigadas y apoyar las industrias existentes como la minería y la perforación.

Los candidatos tradicionales como Rivas, Molinas y Romo tienen las mayores posibilidades de ganar, y también son los más propensos a favorecer los intereses comerciales existentes por sobre las preocupaciones de ambientalistas o grupos indígenas. Es probable que los candidatos de centroizquierda como Rosero y Cancimence sean más receptivos a las preocupaciones de la Minga, entre otros, y encontrarán apoyo entre las ONG, activistas y sus aliados internacionales y nacionales. En última instancia, la polarizada elección en el Putumayo refleja los profundos desafíos para la estabilidad y los negocios extranjeros en esta turbulenta región.

CONCLUSION

Las elecciones resaltan los contrastes entre los departamentos y las capitales más ricas de Colombia y sus áreas más pobres y distantes. Las primeras se modernizan y cosechan los beneficios de años acumulados de estabilidad política, en donde las políticas han evolucionado para reflejar un entorno empresarial y ciudadano más dinámico. En este entorno priman las discusiones sobre la actualización de sistemas de transporte público, la atracción de empresas de tecnología y la racionalización del turismo, a la vez otros temas considerados progresivos como la inclusión ciudadana, los derechos de las mujeres y la protección del medio ambiente. En este entorno, los partidos de derecha y tradicionales, que históricamente han hecho campaña por la ley y el orden, ahora se ven obligados a formular posiciones políticas más matizadas sobre temas que son importantes para los ciudadanos alejados del conflicto. Todo esto sugiere progreso hacia el desarrollo exitoso de entornos favorables para los negocios en las ciudades y departamentos más desarrollados de Colombia.

Por el contrario, las tendencias electorales en las áreas más pobres y marginadas del país parecen no haber cambiado en lo absoluto, más bien han empeorado. En áreas afectadas por conflicto, pobreza e ilegalidad, la preocupación política lucha por ir más allá de los temas de seguridad, justicia social y la provisión de necesidades básicas. Los intereses políticos tradicionales tienden a dominar los procesos electorales, con sus respectivos riesgos de integridad y limitaciones en las oportunidades comerciales asociados. Aunque las elecciones en zonas

ricas y cosmopolitas no son inmunes al fraude electoral, los conflictos de intereses entre candidatos y empresas familiares y otras formas de corrupción, son significativamente más transparentes y los candidatos están más orientados a la solución de problemas.

Nos quedan, entonces, dos Colombias que se mueven en direcciones distintas. Por un lado, las ciudades más grandes y sus departamentos correspondientes disfrutan de niveles de vida en constante mejoramiento a raíz de la modernización económica, el crecimiento del turismo y la mayor inversión extranjera. Por otro lado, las áreas pobres de Colombia aún no pueden superar la violencia y las plagas sociales que la aquejan durante décadas, como lo sugiere el reciente rearme de algunos miembros del anterior grupo guerrillero de las FARC. Visto a la luz de este nuevo desarrollo, las elecciones de octubre resaltan cuán separados realmente están los polos económicos y sociales del país.

Las elecciones también dejan en claro que Colombia es un país donde la línea entre los negocios y la política es borrosa, en algunas áreas más que en otras. Hacer inversiones y protegerlas requiere no solo comprender las tendencias políticas generales del país, sino también los detalles en las subregiones del área de operaciones prevista. Las relaciones familiares, el contexto histórico y el entendimiento cultural son solo ejemplos de los muchos factores que subyacen una inversión exitosa. Las elecciones son una medida excelente de algunos de estos factores, ya que dan una muestra del cambio o estancamiento, deterioro o mejora de las subregiones del país. Esperamos que a través de este estudio hayamos dibujado una imagen general de la política colombiana e introducido temas y expectativas adecuadas y precisas para el 27 de octubre y más allá.